

Benito Juárez

***Documentos,
Discursos y Correspondencia***

Tomo 3, capítulo XIX

Selección y notas de
Jorge L. Tamayo

Edición digital coordinada por
Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva

Tomo revisado y anotado por
Juan Manuel Pérez Zevallos

Versión electrónica para su consulta
Aurelio López López



Año 2006

Tomo 3, capítulo XIX

**Anotado y revisado por
Juan Manuel Pérez Zevallos
(CIESAS, Distrito Federal)**

Capítulo XIX

**Estados Unidos propone, con
franqueza, una nueva cesión de
territorio y perfeccionar el derecho
de paso en Tehuantepec**

Año de 1857

CAPÍTULO XIX

ESTADOS UNIDOS PROPONE, CON FRANQUEZA, UNA NUEVA CESIÓN DE TERRITORIO Y PERFECCIONAR EL DERECHO DE PASO EN TEHUANTEPEC

1 8 5 7

Al iniciarse el gobierno del Presidente Buchanan, ocupa la secretaría de Estado el general Lewis Cass, quien pone oídos sordos a las consideraciones del ministro Forsyth, promotor de la siguiente táctica amañada frente al gobierno de Comonfort: habría que ayudarlo con un empréstito para imponerse sobre el ejército profesional y dominar a los dignatarios de la Iglesia; una vez consolidado y firme, como consecuencia del mismo préstamo, se le podría plantear cesión territorial. Lo contrario, según Forsyth, no era posible, pues de faltar un gobierno fuerte, éste no podría enfrentar la repulsa de la opinión pública por una nueva pérdida de territorio.

Cass no piensa así; sureño, como el nuevo Presidente, ansioso de llevar la frontera más al sur y de consolidar el paso por el Istmo de Tehuantepec, prepara, el 17 de julio de 1857, dos comunicaciones en que da instrucciones al ministro Forsyth sobre ambos temas y que son el antecedente inmediato de las posteriores negociaciones que llevaron al Tratado McLane-Ocampo.

El senador Judith P. Benjamín y Emile La Sere, representantes de la Louisiana Tehuantepec Co., titulares de la concesión otorgada al grupo Sloo, fueron los portadores de esos pliegos, quienes llegaron a la ciudad de México a fines de agosto de 1857, logrando, en pocos días, del gobierno del Presidente Comonfort, la concesión a favor de su empresa para construir la ruta interoceánica, utilizando el río Coatzacoalcos en su parte navegable y complementándola con un ferrocarril en el resto.

Se reproduce el texto de la concesión, por ser –no cabe duda– un alarde de habilidad política del gobierno de Comonfort.

Con sorna y acaso con ironía, Cass promete a Forsyth, en una de esas comunicaciones, que de alcanzar buen éxito en sus gestiones, será incluido en la lista de los más distinguidos diplomáticos de Estados Unidos (“*on the list of America’s most ditinguished diplomatics*”).

Hay que leer con cuidado tan interesantes, generalmente ignorados por los historiadores o utilizados dolosa y fragmentariamente. En cada uno se aborda con amplitud tema diferente y termina con un proyecto de tratado, que Forsyth deberá presentar al gobierno de México.

En el correspondiente cambio de frontera, como un eufemismo se menciona a la cesión de territorio, el secretario de Estado Cass, instruye a Forsyth que ofrezca una compensación de 12’000,000 de dólares ó 15’000,000 como máximo, a cambio de la península de Baja California, la mayor parte del estado de Sonora y la superficie de Chihuahua al norte del paralelo de 30°. La magnitud de esa pretensión puede apreciarse en el grabado que se hace figurar frente al mencionado proyecto de Tratado. Previendo alguna resistencia por parte del gobierno mexicano, se le autoriza a ofrecer por separado 8’000,0000 de dólares, únicamente por la parte de Chihuahua y Sonora y 4’000,000 de dólares por la península de Baja California.

Respecto al tránsito por el Istmo de Tehuantepec, se inicia la comunicación correspondiente, con una declaración categórica sobre las ventajas que para Estados Unidos representa la construcción de un ferrocarril. Es provechoso leer con cuidado ese documento, pues casi no hay párrafo sin miga. En el segundo párrafo, que reproducimos a continuación y que subrayamos, se explica la posición del gobierno estadounidense y su interés por un tratado suplementario al de La Mesilla:

“Conforme a nuestro Tratado con la República Mexicana, concertado el 30 de diciembre de 1853, *Estados Unidos adquirió un derecho de tránsito al través del Istmo, que nunca y bajo ninguna circunstancia abandonará. Lo estipulado en esa oportunidad podría bastar para todo lo que se refiere a los propósitos prácticos; sin*

embargo, es de desear que las cláusulas de dicho Tratado se confirmen, amplíen y se estipulen en forma más específica. En consecuencia, se propone ahora, celebrar un nuevo Tratado con este fin”.

También, apartándose de posiciones anteriores y “en obvio de confusiones” según apunta Fuentes Mares,¹ explica Cass la justificación de la redacción del primer artículo del proyecto de Tratado, que reproducimos a continuación:

“Pero, sean cual fueren los derechos de las partes que crean los conflictos de las concesiones mexicanas, el interés del gobierno y del pueblo de Estados Unidos, demanda que el derecho permanente del camino a través del Istmo, quede establecido sobre la base de un Tratado. Para ese propósito, le transmito los artículos que deben presentarse al gobierno mexicano”.

“El 10° de estos artículos, después de confirmar las estipulaciones a favor de Estados Unidos, en artículo 8°. del Tratado de diciembre de 1853 y haciéndolo aplicable a cualquier compañía o individuos que puedan construir el camino, contiene una cesión expresa de los derechos de tránsito a través del Istmo, a favor de Estados Unidos y sus ciudadanos, en los términos generales y completos, reservándose, sin embargo, el derecho de soberanía a la República Mexicana”.

Forsyth se desconcierta al recibir tales instrucciones y, sobre todo, es visible su irritación por la ingerencia del senador Benjamín y La Sere. En comunicación al secretario de Estado, de 15 de septiembre inmediato, explica con minucia y detalle la situación. Hace un gran elogio, por venir de quien viene, al relatar su entrevista con el presidente Comonfort y estampa esta frase, por demás importante, al juzgar a esa administración: “el actual gobierno de México se ha comprometido firmemente ante la Nación, a no ceder un palmo del territorio nacional”.

Con extraordinaria franqueza relata los incidentes de su gestión privada con el presidente Comonfort y su fracaso. Ello explica el frío y pobre planteamiento oficial; se limita a enviar al ministro de Relaciones,

¹ José Fuentes Mares, *Juárez y los Estados Unidos*. México, 1960. Libro Mex-Editores, pág. 84.

Sebastián Lerdo de Tejada, una breve y displicente nota en que, sin dar razones, ni justificar la pretensión, remite el proyecto de los dos Tratados.

En el Archivo de la Secretaría de Relaciones, hemos encontrado la traducción de esos dos proyectos, que, comparados al texto inglés, es fiel en su contenido más no en su redacción, pero que se reproducen sin arreglo ni retoque, junto con la versión inglesa.

La respuesta de Sebastián Lerdo de Tejada es digna, de altura; breve y tajante. Respecto a un proyecto, *“hace constar que el gobierno de la República considera inadmisibile cualquier plan que esté basado en la cesión de alguna fracción de territorio nacional”*. Respecto al Tratado sobre el Istmo de Tehuantepec... *“México no puede admitir estas estipulaciones, ya que ello cercenaría sus derechos de soberanía en este territorio”*. Con mano dura, si bien cortés, se da fin a la nota, afirmando: *“...las negociaciones serán infructuosas si S. E., señor Forsyth, siguiendo sus instrucciones, no consiente en prescindir de los puntos indicados...”*.

La comunicación del ministro Forsyth al secretario de Estado Cass, nos informa —y es testigo de excepción— que el gobierno de Comonfort maniobró con suma habilidad frente a esta embestida.

Ha tratado directamente y al margen de la legación de Estados Unidos, con el senador Benjamín y con La Sere. Aprovechando los intereses mercantiles de esos “patriotas e inteligentes caballeros”, como con ironía les llama Forsyth, Comonfort los engolosina dando a la Compañía Louisiana de Tehuantepec una concesión que definitivamente da fin a las viejas reclamaciones estadounidenses, a pretexto de la concesión de Garay y de la posterior a Sloo.

Irritado el ministro Forsyth, al comentar el triunfo que el gobierno de Comonfort ha logrado, afirma que se ha violado el artículo 8º. del Tratado de La Mesilla o Gadsden y también que... *“todo el espíritu y contexto de la concesión, excluye cuidadosamente la idea de que ningún otro interés, que o sea el mexicano, ha sido consultado, así como que la única autoridad que se reconoce, es la mexicana...”* ¡Qué mejor elogio para un gobierno en boca de un ministro extranjero!

DOCUMENTOS

Año de 1857

FORSYTH TRATA DE JUSTIFICAR SUS OPINIONES ANTE
WASHINGTON

México, abril 4 de 1857

Sr. Lewis Cass
Secretario de Estado de los Estados Unidos

Señor:

Por conducto del coronel Butterfield recibí los despachos 11 y 12 del departamento de Estado, fechas 3 y 11 de marzo y, de conformidad a las instrucciones que transmitían, comuniqué su contenido al gobierno mexicano.

Sabiendo que las convenciones que firmé con las autoridades de este país el 10 de febrero próximo pasado, contienen algunos elementos que se oponen a las “prudentes consideraciones” de mi gobierno, no me sorprendió la impresión que produjeron en el Presidente y en el gabinete; sin embargo, estoy persuadido de que las estipulaciones insertas en esas convenciones son impuestas por las circunstancias y, a pesar de que la razón sanciona la naturaleza de las mismas, el gobierno de Estados Unidos deberá adoptarlas si quiere impedir que sobrevengan graves males en sus futuras relaciones con México.

Si, como se desprende de los despachos que se me enviaron, las convenciones no se han rechazado definitivamente sino tan sólo se pospuso su examen, considero conveniente exponer a ese departamento las consideraciones que me llevaron a negociarlas en su forma actual, las que, por la premura de enviar los Tratados, no tuve oportunidad de incluir en las cartas que los acompañaban.

Las instrucciones originales que ese departamento me envió, eran

perentorias; debía negociar, si era posible, una convención postal, un tratado de límites que beneficiara por igual a ambos países, una convención que designara una comisión para el arreglo de las reclamaciones estadounidenses en contra de México y, por último, debería persuadir a México que modificara sus aranceles y dictara las órdenes necesarias para ampliar y vigorizar nuestro decreciente comercio con ese país. A mi llegada, me dediqué diligentemente a cumplir los deberes que se me encomendaron. En una extensa carta que envié al Presidente de Estados Unidos, que acompañaba a mi despacho número 10, expuse ampliamente los obstáculos que se oponían al éxito de mis propósitos. Algunas de las razones ahí expuestas, referentes a las peculiaridades del pueblo y del gobierno con los que debía tratar, eran de tal naturaleza que, en realidad, no me atrevía a incluirlos en los archivos de mi país, pues su inverosimilitud sorprendería en lo futuro; por ello, me remito a dicha carta que indudablemente se encuentra en los archivos del departamento de Estado o en la oficina de la residencia presidencial. En esencia, afirmaba que desde la guerra de 1846-47, ni definimos nuestra política con México, ni hemos sostenido relaciones estables con este país.

Durante 10 años no hemos estado ni en paz ni en guerra con esta República pero, por lo que refieren los ciudadanos estadounidenses que la han visitado, por la desconfianza y recelo con que han sido tratados y los ultrajes a que han sido sometidos, bien podríamos estar en plena guerra. Mis predecesores han presionado una y otra vez a este gobierno para obtener la satisfacción de las reclamaciones que semejante trato ha producido, pero sin éxito alguno. Alegando que tales ultrajes son cometidos por funcionarios locales muy lejanos al centro del gobierno, éste intenta liberarse de la responsabilidad y niega su reparación sobre las bases de que se trata de actos que no comete el Supremo Gobierno y usa ingenuamente todos los recursos que se le ocurren para obstaculizar y demorar a la justicia. Desde mi llegada, encontré estas reclamaciones acumuladas en la legación y, obedeciendo las instrucciones que impartió el departamento de Estado, procedí de inmediato a lograr se les haga justicia. Advertí que para lograrla existían sólo dos medios: primero, usando la intimación, con la presencia de nuestra fuerza naval en las

costas mexicanas, para castigar con rapidez y decisión a los autores de estos ultrajes y, segundo, usando una política pacífica y amistosa, eliminar los prejuicios y desconfianza que subsisten contra nuestro país, que son la verdadera causa de las violaciones hechas a los derechos de los ciudadanos estadounidenses.

Poco después de que envié estas consideraciones a mi gobierno, el ministro de Relaciones me invitó a sostener una conferencia, en la que expuso las dificultades políticas y económicas de su gobierno, la necesidad de colaboración y de pedir a Estados Unidos un auxilio amistoso, por ser México su vecino más cercano y concluyó preguntándome si estaba preparado para negociar un préstamo. En ese momento contesté que no tenía la autoridad necesaria, puesto que al salir de Estados Unidos mi gobierno no tenía conocimiento de los deseos de México a este respecto, pero que, como mis instrucciones se referían a varios asuntos diplomáticos, no objetaba negociar un “arreglo” que incluyera en esos asuntos su proposición de solicitar un préstamo; de todo esto ya informé a mi gobierno en el despacho número 14. Se abría, así, la posibilidad de llegar a una de las dos soluciones posibles, de las cuales la mejor y de menor costo, es aquella que yo había recomendado al Presidente. Esta nueva fase del carácter mexicano era tanto más significativa cuanto que se presentaba en un momento en que México estaba envuelto en un violento conflicto con la legación inglesa, acerca del asunto Barrón y en que sus relaciones con España asumían diariamente una forma muy hostil. Como para México el tiempo era precioso, porque sus necesidades lo urgían, luchando con tropas que no estaban pagadas y con un Tesoro vacío, con la Iglesia levantada en armas y enarbolando la bandera de la traición y del crimen en media docena de diversas regiones del país y, como de hecho está cortada la comunicación regular con Estados Unidos, me consideré indigno de mi puesto si no aprovechaba la dorada ocasión que se me ofrecía; el resultado es un plan que elaboré y presenté y que, sustancialmente, forma parte de los cinco proyectos de convenciones y tratados del 10 de febrero.

En los despachos que adjunté a los Tratados, expuse brevemente los puntos que consideré ganados mediante la negociación. No tuve

tiempo de extenderme explicando ampliamente su significado. Al definir mis normas de conducta, he tenido la constante idea de que el verdadero interés de Estados Unidos es ver a México sabio y firmemente gobernado, independiente de influencias europeas indebidas; sus relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos se van extendido y fortalecido hasta hacer de México un país bueno, útil y un cordial vecino. Conozco bien las intenciones de nuestros compatriotas por adquirir una parte de territorio mexicano, pero estoy seguro que este gobierno no cederá a sus deseos a costa del honor, de la dignidad y de la justicia del país. Se intentó, entonces, conseguir este fin por otros medios que no fuesen los del filibusterismo. Cuando empecé a tratar con este gobierno, el asunto de la adquisición de territorio estaba siempre dentro de mis planes, pero por no considerarlo prudente no podía traerlo a la consideración de México directamente. El Plan de Ayutla, que puso en la presidencia al gobierno de Comonfort, considera la venta de territorio como poco menos que traición y el mismo Presidente está comprometido a no dar su consentimiento. Dijo prácticamente que antes de ceder un palmo de territorio se tiraría de las ventanas del Palacio, renunciaría a su puesto y hasta moriría. Es cierto que el general Santa Anna afirmaba lo mismo con igual energía y, a pesar de eso, cedió La Mesilla a cambio de dinero; posiblemente el gobierno actual desmienta sus declaraciones con sus hechos, pero es indudable que, fracasadas las negociaciones que he sostenido, eran necesarias para allanar el camino a este cambio, en caso de que tuviera lugar. Sea como fuere, hubiera resultado mucho menos útil haber intentado adquirir territorio, ya sea por medio de la compra o como garantía del préstamo propuesto. Acerca de este punto estaba bien seguro de lo que debía hacer y también estaba convencido de la imposibilidad de adoptar esa medida sin comprometerme en el asunto con el Presidente o el ministro de Relaciones Exteriores.

En la carta a que hice referencia, dirigida al último Presidente, intentó demostrar cómo se obtendría este punto sin aumentar el prejuicio nacional de México contra Estados Unidos. Consideré que un préstamo a México sería una especie de hipoteca flotante sobre el territorio de un vecino pobre, inútil para él, pero de gran valor para nosotros que,

finalmente, podría pagarse con honor realizando una pacífica venta que liquidaría la hipoteca; solución a la que daría su consentimiento. En pocas palabras, advirtiendo que era imposible adquirir territorio inmediatamente, hice lo mejor que podía hacer, allanar el camino para una futura operación.

Sería una injusticia suponer que el Presidente Comonfort y su Gabinete no advirtieran mis intenciones y previeran las consecuencias de la negociación que les proponía: con ella, les estaba permitiendo llegar al punto de la cesión de territorio sin herir el orgullo nacional. Estoy convencido de que por ningún otro medio podría obtener el territorio que deseamos en forma rápida, fácil y a bajo costo.

Supongo que los aspectos comerciales de la negociación difícilmente requerían una justificación. El 20% a favor del comercio con Estados Unidos, en barcos de ese país, totalmente monopolizados por las naciones comerciales de Europa. Tengo información fidedigna de que el encargado de negocios inglés ha declarado que si se ratifica el Tratado con México, le costaría al comercio inglés 15'000,000 de dólares anualmente. La universal convicción entre los hombres inteligentes y profesionales de todos los países, es que la consecuencia de esto residiría en el cambio del comercio mexicano a nuestro favor. Sin duda, separar el 20% de los derechos de exportación de plata en barras y en moneda, especialmente desde que los derechos se elevaron del 3.5% a 6%, nos dejaría un margen de provecho que disminuiría los 25'000,000 de dólares que en la actualidad salen de Estados Unidos para Inglaterra.

Me parece muy fácil demostrar que este resultado pudo conseguirse sin ninguna mengua de nuestro tesoro, pues los 8'000,000 que costaría asegurar el comercio estadounidense, manufactura y navegación, regresarían al Tesoro y al país por las ganancias que reportaran los puertos, almacenes y otros depósitos que el aludido comercio adquiriría.

Vistas así las cosas, se desvanece la objeción alegada por algunos periódicos del norte, de que el único beneficiado con esos Tratados era el sur; aquellos que fabriquen las mercancías y los dueños de los barcos que las transporten, serán los que se beneficien con el convenio y, con

seguridad, pertenecen al norte. Igualmente equivocados están los periódicos nuestros que consideran que apropiarse de la deuda de la convención es una cosa similar a regalar las sobras al cancerbero inglés. Nada más lejos del propósito que abrigamos el gabinete mexicano y yo mismo y de la consideración que la legación inglesa hace del asunto. A ésta le parece que la parte más desagradable de todo el “arreglo” es quitar de las manos de la legación inglesa un instrumento de influencia que sin escatimar ha usado en contra de este gobierno. Esta deuda no es una deuda flotante contraída con capitalistas y comerciantes ingleses; es, por el contrario, el resultado de una comisión nombrada para ajustar las reclamaciones inglesas contra México, solemnizado en forma de convención.

Se podría preguntar ¿por qué incluir ese asunto en la negociación? Pues si México quisiera saldar esa deuda ¿acaso no podría hacerlo sin mezclarla con el préstamo? La respuesta es que yo deseaba asegurar la extinción de la deuda británica y con ello la de la influencia británica sobre México. Si el dinero fuera al Tesoro mexicano habría dudas sobre los fines a que se dedicaría. Por eso consideré un punto importante que la deuda se pagara y, aunque México estaba muy anuente en hacerlo, no hubo modo de asegurarlo fuera de la convención.

Omito los Tratados Postal y de Reciprocidad, puesto que si existen errores, son posibles de corregir, pues es tal la ansiedad de este gobierno por el destino que estos Tratados pudieran tener en Washington, que está preparado a aceptar cualquier mejora que Estados Unidos le haga.

Ya informé al departamento de Estado acerca de que se me obligó a aceptar un arbitraje sobre la cuestión de las depredaciones cometidas por los indios, según las considera el Tratado de Guadalupe y los de 1853, diciéndome que, de no aceptarlo todo, la negociación podría fracasar. Estoy convencido que aun removiendo este punto, México hubiera aceptado si hubiere encontrado el decidido rechazo de Estados Unidos. No conozco los sentimientos que abriguen aquí actualmente sobre todo este asunto, pero tengo razones para afirmar que el presidente Comonfort se siente herido por el camino que ha seguido la negociación

y considera que sus iniciativas de mejorar las relaciones con Estados Unidos han sido mal recibidas. Estos sentimientos son naturales y me esforzaré por corregirlos, dado que durante dos meses ha considerado esta negociación como el punto más importante que salvará a su gobierno y a su país. Significó un fuerte golpe para él. No puede preverse cómo reaccionará. Desde que las noticias llegaron a esta capital, había sido descubierta una conspiración del partido clerical y su jefe, don Ignacio Aguilar y algunos otros, habían sido arrestados.

Creo que mi negociación aportaba muchos elementos de promoción para los intereses comerciales y marítimos de Estados Unidos y era valioso para asegurar a un tribunal los ajustes de las reclamaciones de nuestros ciudadanos contra la justicia de México, esto es, en sus aspectos políticos y en nuestras relaciones internacionales, que me parecieran merecedoras de la mayor consideración.

Es peligroso que los estadistas de Estados Unidos ignoren el hecho de que otras naciones, además de la nuestra, tienen puestas sus miras en este rico y grandioso país. Ya sea que México mantenga su nacionalidad o se desintegre en pedazos, tenemos un profundo interés en su futuro y debemos, por lo tanto, asegurar nuestra influencia en sus decisiones, si es que no puede mantenerse sin la colaboración de una potencia amiga y, su última apelación a nuestro país, es una confesión de ello. ¿Cuál será la fuerza capaz que pueda ocupar el puesto de mando como benefactor y amigo? Si Estados Unidos se niega a aceptarlo, algún otro país lo hará y ¿qué nos parecería si se presenta en forma de un príncipe francés sostenido por 10,000 bayonetas? ¿o que el oro inglés se haga cargo de la hipoteca que nosotros rehusamos en el territorio mexicano? Créame, señor, no podemos jugar al gato y al ratón con nuestra Doctrina Monroe: no se puede dejar morir a México por falta de ayuda médica, sólo porque nosotros no vamos a ser el cirujano. Debe sostenerse con ayuda de algún país, ¿será europeo o los Estados Unidos?; yo respondo, indudablemente que Estados Unidos, haciendo méritos de humanidad, buena vecindad y sana política. Pues en caso de que fuera Europa preveo una multitud de contingencias que harían de México el campo de batalla por el mantenimiento de la supremacía estadounidense

en América, el lugar donde se demostraría el valor y la virtud de la Doctrina Monroe. Soy, por supuesto, un creyente en lo que en el lenguaje político actual es llamado el Destino Manifiesto. En otras palabras, creo en la enseñanza de la historia y la experiencia y en que tanto nuestra raza como nuestras instituciones se esparcirán por el continente, haciendo palidecer y desaparecer a las razas mestizas del Occidente ante la superioridad del hombre blanco.

El mayor peligro que corremos es que nuestro temperamento nacional nos arrastre demasiado rápidamente por la senda del destino y que la pasión que heredamos por la posesión de la tierra derribe las barreras de nuestra seguridad y honor nacional. Si controlamos debidamente esta pasión puede dudarse que el territorio vendrá a nosotros tan pronto como lo demanden las exigencias de nuestro aumento de población.

No sería sabio ni prudente que nuestro gobierno sea el guardián y amigo de tan rico Estado que, tarde o temprano, ha de sufrir la suerte de sus ancestros, accediendo a que sea erigido y manejado por europeos. Desde que llegué a México pienso en esto y me he persuadido firmemente que ha llegado la hora para Estados Unidos de determinar qué país adoptará esta importante actitud hacia México. No me sorprendería saber, en cualquier momento, que algún otro país hubiera respondido a la situación, apoderándose de las ventajas que nosotros rechazamos. Al delinear la presente negociación siempre tuve conciencia de lo que podría suscitarse cuando el Tratado sobre el préstamo fuera sometido a la consideración de nuestro gobierno. Se afrontó una cuestión constitucional igualmente grave con la compra de la Louisiana y la Florida y, si las negociaciones del caso actual, no fueran dificultadas por sus aspectos comerciales, pensaría que las compras de aquellos territorios, han establecido los precedentes que conformarían nuestra política exterior en lo referente a que, al delinearla, no se hacía imperativo el silencio de la Constitución: las relaciones exteriores de nuestro gobierno pueden comprometerse con la nación con que se firme el tratado, sin otras restricciones que las que éste delimite. Sobre este punto, los más estrictos intérpretes de las leyes encontrarán que en los

trabajos de la autoridad máxima en el tema, Mr. Calhoun —vol. I, pp. 202, 203 y 204; así como en su discurso sobre la ayuda a Irlanda, pronunciado en la segunda sesión de la 29ª reunión del Congreso Mundial de 1847— dice: “si podemos dar una parte, podemos prestar”. Pero 8’000,000 del total no son realmente un préstamo, sino una remuneración por lograr el monopolio del comercio mexicano. Siendo yo mismo un jurista estricto, puedo imaginarme que sobrevendrán serias dificultades en nuestras relaciones exteriores, en que las necesidades nacionales predominantes nos forzarán aun en el caso de no estar autorizados por la Constitución. Considero que en esta emergencia existe una necesidad y que la inversión de unos cuantos millones de nuestro pletórico Tesoro, sería muy beneficiosa si se utilizara para evitar un conflicto con otro país, por la posesión de una frontera que tarde o temprano quedará fuera de la órbita de México, pues debemos pensar que esas potencias son tan codiciosas como nosotros.

Quedo de usted...

John Forsyth
Ministro de Estados Unidos en México

FORSYTH CONSIDERA PELIGROSO PRESIONAR AL
GOBIERNO MEXICANO PARA QUE VENDA
TERRITORIO

Extraoficial

México, abril 10 de 1857

El coronel Butterfield, a quien se confiaron los despachos que envió el departamento de Estado informándome de la negativa del gobierno de remitir los tratados del 10 de febrero al senado, no ha llegado aún a la capital, pues una seria enfermedad lo detiene en la ciudad de Puebla.

Me encuentro maniatado por la falta de información sobre las objeciones que mi gobierno hace a los cinco tratados y a sus determinaciones sobre la continuación de las negociaciones que he iniciado; es indispensable que yo reciba esas instrucciones para que pueda enfrentar y contrarrestar el descontento que se empieza a esparcir entre el público y el gobierno acerca de lo que considera un tratamiento altivo y descortés en la negociación de las convenciones.

La presencia del coronel Butterfield en esta ciudad sería muy conveniente para mí, pues podría proporcionarme alguna información personal sobre el asunto.

Entretanto, las noticias que recibimos por intermedio de los periódicos estadounidenses, sobre todo del *New York Herald*, informando que el departamento de Estado trabaja en la elaboración de un nuevo tratado que incluye la cesión de territorio mexicano, han contribuido a fomentar el descontento. Para dar a usted una idea del efecto que produce en los mexicanos la posibilidad de una nueva cesión de territorio, le adjunto una copia del *Trait d'Union*, el mejor periódico del país. Su editor, el señor Barres, descuella tanto por su talento y sus realizaciones

como por su carácter íntegro y su valiente republicanismo. Francés de nacimiento, abandonó su país cuando se convenció de la incompatibilidad de sus convicciones con la política de la dinastía de Napoleón. Es un gran admirador de Estados Unidos y sus instituciones y fue uno de los más ardientes defensores de los tratados. Con estos antecedentes podrá usted comprender mejor la autoridad de sus opiniones.

Estoy persuadido por las circunstancias, de que en este momento sería peligroso e inoportuno presionar a este país para negociar la venta de su territorio; sin embargo, los funcionarios, la opinión pública y las decisiones oficiales, cambian tan rápidamente aquí que cualquier día puede presentarse el momento oportuno; pero el actual sería el peor para poner en práctica semejante determinación. Aunque fuese partidario de realizar la negociación, el gobierno de Comonfort es por ahora demasiado débil para llevarla a cabo y su caída pondría en el poder a los más violentos elementos antiestadounidenses, lo que sería muy triste, tanto para este país como para sus relaciones con Estados Unidos. En estos días reina una gran inquietud en la capital y se teme que pueda declararse una rebelión.

Por los periódicos podrá usted ver que el arzobispo ha tomado partido contra la Constitución y una gran cantidad de empleados del gobierno se ha rehusado a jurar su cumplimiento; por ello sólo en el ayuntamiento de la ciudad, 40 antiguos funcionarios han sido exonerados. En todo el país, los sacerdotes se niegan a impartir los sacramentos de la iglesia a todos aquellos que tomen el juramento o que compren las propiedades de la iglesia que se expropiaron por la promulgación de la Ley Lerdo. Hasta los moribundos se presentan a juicio final sin los auxilios religiosos que, de acuerdo con los dogmas de los sacerdotes, son imprescindibles para la salvación de su alma. Por tanto, los ministros de Dios están condenando las almas al infierno por el crimen de haber jurado la ley orgánica de la tierra.

Hasta la llegada del barco Guerrero a Veracruz, el gobierno, aparentemente, no había hecho nada para castigar estos actos desleales de los sacerdotes. A la llegada de ese barco, el gobierno recibió un informe

telegráfico de que las noticias sobre el tratado eran favorables; ese mismo día el Presidente emitió la orden a los gobernadores de Estado, de enviar prisioneros a esta ciudad a todos los sacerdotes que predicaron la desobediencia a la Constitución. Esta enérgica acción, es, sin duda alguna, una demostración de autoridad para anticiparse a nuestro auxilio. Sin embargo, ha tenido otras consecuencias.

El Presidente se ha trasladado a Tacubaya y el ejército de la capital ha sido acantonado en diferentes pueblos alrededor de la ciudad. Hoy —Jueves Santo—, es el aniversario de una ceremonia peculiar en la que es costumbre que el primer magistrado se dirija a la catedral, donde recibe de manos de la Iglesia las llaves del sagrario, permaneciendo allí 48 horas. La ceremonia simboliza la obediencia a las autoridades eclesiásticas. Para evitar un posible problema con la iglesia, el Presidente salió fuera de la ciudad; esta obligación recae entonces sobre el gobernador de la ciudad y el ayuntamiento. De acuerdo con esto, el gobernador Baz, junto con los miembros del gobierno de la ciudad, se presentó en la catedral a las 10 de la mañana; los sacerdotes rehusaron verlos y no les permitieron la entrada al edificio. Poco después, el grito de religión y fueros se elevó en la plaza. El gobernador Baz se encontraba preparado e inmediatamente arrestó a aquellos que habían gritado. Se teme que no terminen aquí las cosas y que si se suscita una guerra civil, ésta será en extremo sangrienta.

El ilustre y progresista partido de México, representado por el gobierno de Comonfort, está haciendo los mayores esfuerzos para liberar a este infeliz país de los reglamentos supersticiosos y carentes de principios de los sacerdotes. La simpatía hacia el partido liberal de parte de aquellos que son amigos de la verdad y de la libertad, se halla presente en esta lucha. Yo creo que Comonfort necesita solamente el respaldo económico para triunfar; ya ha dado demostraciones de superioridad y su triunfo estaría asegurado si tuviera dinero para pagar sus tropas, evitando que sean sobornadas por la opulenta iglesia. Considero que se encuentra en un momento arriesgado de su vida y, si lo aprehendieran, sería sacrificado inevitablemente al furor del partido de la iglesia.

Además de la crisis con la iglesia y el aspecto amenazador de las

relaciones con España, el gobierno está actualmente arrostrando la postura arrogante de la legación británica respecto al asunto Barrón.

Mr. Letson, el encargado británico, ha enviado un ultimátum dando nueve días de plazo para contestarlo. México, a pesar de que tiene la razón de su parte, se verá obligado a ceder. Barron es un súbdito inglés poseedor de una fortuna de 10'000,000 de dólares que ha logrado mediante notorio contrabando y su casa ha sostenido durante años el monopolio del tráfico de México en el Pacífico, con gran detrimento de los intereses americanos; es un violento enemigo del gobierno y se dice que goza de una gran influencia en la legación británica. Así pues, este triste gobierno está rodeado de dificultades, peligros y enemigos y tiene urgente necesidad de amistad, socorro y apoyo.

He tenido oportunidad de observar cuidadosamente los acontecimientos que están sucediéndose y estoy persuadido de que sería impolítico callar estas consideraciones de humanidad y libertad y que Estados Unidos debería tender su mano auxiliándolo con la ayuda necesaria y oportuna.

A reserva de que se reanude la comunicación entre Nueva Orleans y Veracruz, sugiero que los despachos del departamento de esta legación sean enviados a través de los barcos de Nueva York y del Istmo, vía Acapulco. Por esta ruta llegarán desde Nueva York en 19 días.

Soy su, etc....

John Forsyth

SE LE DAN INSTRUCCIONES A FORSYTH PARA QUE
COMPRA BAJA CALIFORNIA Y GRANDES PORCIONES
DE SONORA Y CHIHUAHUA

Washington, julio 17 de 1857

Sr. John Forsyth
Ministro de Estados Unidos en México

Señor:

En mi comunicación número 25 de fecha 18 de junio último, se le informó a usted indicándole que el tema de nuestras negociaciones futuras con México estaba a consideración del Presidente y que en breve recibiría instrucciones al respecto. Por ese mismo conducto quedará usted plenamente informado de sus puntos de vista en relación con el trascendental asunto del tránsito de Tehuantepec. Ahora, acompaño el proyecto del tratado, que esperamos esté en condiciones de celebrar con el gobierno de México, para lograr el establecimiento de una nueva frontera entre ambas repúblicas, así como el arreglo de sus mutuas reclamaciones.²

De acuerdo con los dos primeros artículos, se propone, como se dará cuenta, la compra de la provincia de la Baja California, juntamente con casi la totalidad del estado de Sonora y la porción de Chihuahua que se encuentra ubicada al norte del paralelo de 30°. La suma que se ha estipulado para su pago, asciende a 12'000,000 de dólares, o sea 8'000,000 de dólares por el territorio correspondiente a los estados de Sonora y Chihuahua y cuatro por Baja California. Sin embargo, estas

² Se produce a continuación el proyecto de tratado en su traducción al español tomado del Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

sumas no deben considerarse como máximas y queda facultado para aumentarlas, si lo juzgará necesario, para el logro de la compra. Dichas cantidades pueden elevarse, respectivamente, a 10'000,000 la primera y 5'000,000 la última, ascendiendo en total a 15'000,000.

Los motivos que pueden inducir al gobierno mexicano a disponer de esas fajas de su territorio, tomando en cuenta las consideraciones ya mencionadas, fácilmente puede usted suponerlas. La provincia de la Baja California se encuentra tan alejada del resto de México, separada por el Golfo de California y tan distante de la sede del gobierno, que la autoridad que México ejerce sobre ella es poco menos que nominal y, en realidad, carece de valor para esa República. Los otros territorios que se han descrito, independientemente de la distancia que los separa de la ciudad de México, en una gran extensión están ocupados por tribus salvajes de indígenas, que incursionan frecuentemente en las partes más civilizadas del país. Inevitablemente, el territorio adquirido por Estados Unidos se colonizaría en forma rápida y gradualmente eliminaría ese peligro, aumentando así la seguridad de los estados restantes de México. De acuerdo a las anteriores consideraciones, podría agregarse que los habitantes de los dos estados en cuestión, son tan reducidos en número, que definitivamente demuestran la carencia de valor para México y queda excluida cualquier dificultad que pudiera sugerir con respecto a la cesión de un país densamente poblado. Además, se han adoptado amplias precauciones para proteger a sus habitantes por lo que se refiere a su ciudadanía, propiedades y religión, en el caso de que la cesión propuesta se llevase a cabo.

Si resulta impracticable realizar la compra de ambos distritos de Baja California y. de Sonora, esto no impediría necesariamente efectuar la compra de cualquiera de ellos, que el gobierno mexicano esté dispuesto a vender. Es muy importante obtener ambos; empero, usted queda facultado para negociar el que fuere, a un precio que no exceda la cifra antes mencionada. Por ningún motivo debe olvidar que esta cifra, en cada uno de los casos, representa el máximo y que deberá esforzarse, de ser posible, por asegurar la adquisición proyectada, ajustándose a esa suma.

México no debiera objetar, en lo que se refiere a todas las reclamaciones que ese país hizo a Estados Unidos, proposiciones contenidas en el artículo 2°. No se pretende o sugiere que ese tipo de reclamaciones existan, excepto aquellas que este gobierno aceptó como omisiones al no dar cumplimiento a las estipulaciones del artículo 1° del Tratado de Guadalupe Hidalgo. La correspondencia intercambiada entre ambos gobiernos en relación a este asunto, se le ha comunicado en forma exhaustiva. Estados Unidos sostiene que ha dado cumplimiento a todos sus compromisos contraídos, que se basan en el artículo de que se trata y que de no ser así, se presupone que las demandas basadas en el mismo, cualesquiera sea la forma que hubieran asumido, quedaron anuladas por el artículo 3° del tratado del 30 de diciembre de 1853. Difícilmente pueden modificarse los puntos de vista, sostenidos por Estados Unidos al respecto y, por lo tanto, esas reclamaciones que México hace, simplemente carecen de validez efectiva.

En forma similar, las disposiciones para satisfacer las demandas de los ciudadanos de Estados Unidos contra México, se ajustan a las disposiciones anteriores. Muchas de estas demandas le son a usted familiares y queda advertido que han presionado vigorosamente para que este gobierno intervenga. No es conveniente que se les permita continuar en su actual posición por más tiempo y, para evitar dificultades futuras entre ambos gobiernos, es importante buscarles algún arreglo. El pago no abarca reclamaciones que tienen por base un contrato, como aquellas que corresponden a la compañía de Tehuantepec, sino que exclusivamente a aquellas que hayan sido víctimas de un error o de un daño a personas o propiedades, en desacato a la ley. Estas deben ser analizadas cuidadosamente por un tribunal imparcial, que no permitirá demandas exageradas ni exigirá ningún pago exagerado. Con estas restricciones se espera que todos ellos queden comprendidos en la suma de 2'000,000 de dólares. Empero, haya o no cumplido totalmente México con ello, lo que no es probable, hay que objetar las disposiciones del Tratado que confía las investigaciones y las decisiones a Estados Unidos.

Estos puntos de vista bastan para que realice las negociaciones que en la actualidad se le encomiendan. Naturalmente que no se trata de

privarlo a usted de toda libertad en relación a este asunto; pero no hará ningún cambio material en sus disposiciones si no existen razones de peso y, por otra parte, no debe permitir que fracase toda negociación al rechazar cualquier concesión de importancia.

Soy, etc.

Lewis Cass
Secretario de Estado de los Estados Unidos

PROYECTO DE TRATADO PARA MODIFICAR LOS LÍMITES,
ACOMPAÑANDO LAS INSTRUCCIONES AL SEÑOR FORSYTH

Los Estados Unidos de América y la República de México, mutuamente deseosos de eliminar todo punto de incomprensión entre ellos y de establecer las fronteras entre ambos países en tanto sea posible por límites naturales y de conservar las relaciones amistosas que ahora felizmente sostienen, han designado con tales propósitos los siguientes plenipotenciarios, a saber; el Presidente de Estados Unidos, a John Forsyth, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de los Estados Unidos ante la República Mexicana, y el Presidente de México a ..., y los mencionados plenipotenciarios, ya intercambiados sus plenos poderes a conformidad, acordaron los siguientes artículos:

Artículo 1° —Los límites entre ambas repúblicas se estipularán en la forma que sigue: tal como se previene en el 5° artículo del Tratado de Guadalupe Hidalgo y como se define en él, comenzando en el Golfo de México, a tres leguas de tierra frente a la desembocadura del río Bravo, en la mitad del río en el punto donde lo cruza el paralelo de 30° de latitud norte, de ahí al oeste a la intersección de dicho paralelo con el territorio más oriental del río Chico o río Yaqui, bajando hacia la mitad de dicho río Chico hasta un punto conveniente al oeste del mismo, en el centro del Golfo de California; de ahí hacia su desembocadura y rodeando el punto más al sur de la Baja California y septentrionalmente, sobre su costa occidental, conservando tres leguas desde la costa al punto occidental que en la actualidad limita la Alta de la Baja California, quedando declaradas, por el presente, propiedad de Estados Unidos ambas provincias junto con todas las islas adyacentes a la costa occidental de la Baja California y todas las islas del Golfo de California, excepto aquellas adyacentes a la costa de México y sur del río Chico o

Yaqui.

Quedarán canceladas cualesquiera estipulaciones de tratados previos entre ambas repúblicas incompatibles con los límites aquí estipulados.

Artículo 2° —Por el presente, el gobierno de México libera al gobierno de Estados Unidos de toda reclamación existente por parte de ciudadanos mexicanos en contra de Estados Unidos y de toda responsabilidad, cualquiera sea su naturaleza, acordando que asumirá la obligación de satisfacer los reclamos de sus ciudadanos contra Estados Unidos.

Artículo 3° —Por el presente, el gobierno de Estados Unidos libera a la República Mexicana de toda reclamación que se haya suscitado desde la fecha de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo por ciudadanos estadounidenses contra la República de México, por daños en sus personas o propiedades que no estén estipulados en contratos; Estados Unidos toma a su cargo la satisfacción de las reclamaciones de dichos ciudadanos, siempre y cuando no excedan de la cantidad de 2'000,000 de dólares. A tal propósito se acuerda que del total pagado a México, según el artículo 4° del presente Tratado, se reserva la suma de 2'000,000 de dólares, con el fin de esperar la sentencia de la comisión o corte a la cual Estados Unidos encargue la investigación de dichas reclamaciones y, fallada la sentencia, la cantidad decretada por dicha comisión o corte dentro del mencionado límite, será deducida de los 2'000,000 y el saldo, si hubiere alguno, será entregado a México.

Se entiende y acuerda de todos modos, que la sentencia aquí prevista será fallada dentro de los próximos nueve meses después de firmado el Tratado; además, el gobierno de México proporcionará, a demanda de Estados Unidos, para uso de la comisión o corte mencionada, los originales o copias autorizadas de documentos existentes en sus respectivos archivos o sujetos a un convenio necesario para una comprensión adecuada de las reclamaciones a examinarse.

Artículo 4° —Considerando los artículos precedentes, el gobierno de Estados Unidos acuerda pagar al agente debidamente autorizado por el gobierno mexicano, en la ciudad de Nueva York, la suma de 12'000,000 de dólares. De esta suma, la mitad o sea 6'000,000 de dólares, será pagada al canjearse las ratificaciones de este Tratado, 2'000,000 de dólares se reservarán para dar satisfacción a las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses, tal como se previene en los artículos precedentes, y el resto o sea 4'000,000 de dólares, será cubierto en cuatro cuotas mensuales de 1'000,000 de dólares cada una, cumpliéndose la primera al cumplirse los 30 días de la ratificación del Tratado.

Artículo 5° —Los artículos VIII y IX del Tratado de Guadalupe Hidalgo, será aplicados al territorio cedido por la República de México en este Tratado y a todos los derechos de personas y de propiedades incluidas en él, tan completa y eficazmente como si dichos artículos estuviesen aquí especificados.

Artículo 6° —No se considerará válida o será reconocida por el Gobierno de Estados Unidos, ninguna concesión de tierras dentro del territorio ahora cedido con fecha posterior a la firma de este Tratado o que no se haya encontrado y registrado en los archivos de México, a menos que dichas tierras estén ocupadas o en posesión a la fecha de la firma del presente Tratado.

Artículo 7° —La República de México ratificará el presente Tratado en un plazo no mayor de 10 días a la fecha de su firma y quedará en suspenso para su ratificación por Estados Unidos hasta pasados 60 días de la apertura de las próximas sesiones del Congreso y las ratificaciones serán canjeadas dentro de los 10 días de la ratificación por parte de Estados Unidos.

DRAFT OF PROPOSED BOUNDARY TREATY

The United States of America and the Republic of Mexico, mutually desirous of removing subjects of misunderstanding between them, and of establishing the boundary between the two nations, as far as practicable, by natural limits, and of preserving the amicable relations which now happily subsist between them, have for these purposes appointed the following plenipotentiaries, namely, the President of the United States, John Forsyth, envoy extraordinary and minister plenipotentiary of the United States to the Republic of Mexico, and the President of the Republic of Mexico ... and the said plenipotentiaries having exchanged their full powers, which were found to be in proper form, have agreed to the following articles:

Article 1. The boundary between the two republics shall be as follows: Beginning in the Gulf of Mexico three leagues from land, opposite the mouth of the Rio Grande, as provided in the fifth article of the Treaty of Guadalupe Hidalgo; thence, as defined in the said article up the middle of that river to the point where the parallel of thirty degrees of north latitude crosses the same; thence due west to the intersection of that parallel with the eastern most tributary of the Rio Chico or Rio Hiaqui [Yaqui]; thence down the middle of the said Rio Chico to a point due west of the same in the middle of the Gulf of California, thence down the middle of said Gulf to its mouth; thence around the most Southern point of Lower California, and northerly along its western coast, keeping three leagues from land, to the western point of what is now the dividing line between Upper and Lower California, both of which 'provinces, together with all the islands adjacent to the western coast of Lower California, and all the islands in the Gulf of California, except such as are adjacent to the coast of Mexico South of the Rio Chico or Hiaqui, are hereby declared to

be the property of the United States. Any stipulations in previous treaties between the two Republics, which may conflict with the boundary thus described, are to be considered as cancelled.

2. The government of Mexico hereby discharges the government of the United States from all claims of citizens of Mexico, which now exist against the United States, and from all liabilities of any nature kind whatever, agreeing that it will itself assume the obligation of satisfying the claims of its own citizens against the United States.

3. The Government of the United States hereby releases the Republic of Mexico from all claims of citizens of the United States against that Republic, which have arisen since the date of the Treaty of Guadalupe Hidalgo, from injuries to the persons or property of said citizens, and not founded in contract; and the United States undertakes to satisfy these claims of its own citizens to an amount not exceeding two millions of dollars. For this purpose, it is agreed that the sum of two millions of dollars shall be reserved from the amount payable to Mexico by the fourth article of this treaty, in order to await the adjudication of the Commission or Court to which the investigation of such claims shall be committed by the United States; and after such adjudication, the amount decreed by said Commission or Court, within said limit, shall be deducted from said two millions, and the balance, if any, paid to Mexico. It is understood and agreed, however, that the adjudication herein provided for shall be concluded within nine months from the date of the Treaty. The Government of Mexico, moreover, will furnish, upon requisition by the United States for the use of the Commission or Court mentioned in this article, such original or attested copies of documents in their respective archives, or subject to their control, as may be necessary to a proper understanding of the claims to be examined.

4. In consideration of the preceding articles, the Government of the United States agrees to pay to the properly authorized agent of the Mexican Government at the City of New York, the sum of twelve

millions of dollars. Of this sum, one half, or six millions of dollars shall be paid upon the exchange of the ratifications of this Treaty, two millions of dollars shall be reserved to meet the claims of citizens of the United States as provided in the preceding article, and the remainder, or four millions of dollars shall be paid in equal monthly installments of one million each, the first installment to be paid in one month from the ratification of the Treaty.

5. All the provisions of the 8th. and 9th. articles of the Treaty of Guadalupe Hidalgo shall apply to the territory ceded by the Republic of Mexico in this Treaty, and to all the rights of persons and property within the same, as fully and effectually as if the said articles were herein again recited and set forth.

VI. No grants of land within the territory now ceded will be considered valid or will be recognized by the government of the United States, which bear date subsequent to the signature of this Treaty or which have not been located and recorded in the archives of Mexico; unless such lands shall be in actual occupancy or possession at the date of the signature of this Treaty.

VII. This Treaty shall be ratified by the Republic of Mexico, within ten days from the date of its signature, and shall remain open for ratification by the United States for sixty days from the commencement of the next session of Congress, and the ratifications shall be exchanged within ten days from the ratification by the United States.

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO REITERA A SU MINISTRO
EN MÉXICO, SU INTERÉS POR EL TRÁNSITO EN TEHUANTEPEC
Y LE DA INSTRUCCIONES PARA CONCERTAR UN
NUEVO TRATADO

Washington, 17 de julio de 1857

Sr. John Forsyth
Ministro de Estados Unidos en México

Señor:

El valor y la importancia que representa para México un ferrocarril que atravesase el Istmo de Tehuantepec, difícilmente puede ser subestimado. Aspecto en el que también Estados Unidos está profundamente interesado. La proximidad del Istmo en relación a nuestras costas, la salubridad del clima, la adaptabilidad del suelo para la construcción de un ferrocarril y, además, la considerable disminución de distancia en parangón con otras rutas más al sur de nuestras posesiones, ubicadas entre el Atlántico y el Pacífico, todo se conjuga para señalar que es bastante más conveniente que cualquier otra ruta fuera de nuestro propio territorio.

Conforme a nuestro Tratado con la República Mexicana, concertado el 30 de diciembre de 1853, Estados Unidos adquirió un derecho de tránsito a través del Istmo, que nunca y bajo ninguna circunstancia abandonará. Lo estipulado en esa oportunidad podría bastar para todo lo que se refiere a los propósitos prácticos; sin embargo, es de desear que las cláusulas de dicho Tratado se confirmen, amplíen y se estipulen en forma más específica. En consecuencia, se propone, ahora, celebrar un nuevo Tratado con este fin.

Ningún valor puede representar este derecho para ambas Repúblicas, a menos que se adopten las medidas efectivas para la construcción de un ferrocarril que una a los dos océanos. Hasta la fecha se ha perdido un tiempo precioso debido a las concesiones en conflicto, otorgadas por México con ese propósito. Sin embargo, como consecuencia de lo anterior, esta gran obra hubiera resultado infructuosa si se hubiese realizado antes del momento actual.

Ha llegado la época en que no debe posponerse más la iniciación, prosecución y terminación de una empresa en que están vivamente interesados no sólo México, sino todos los países comerciales. Las concesiones en conflicto son dos y habitualmente se las conoce como la concesión Garay y la concesión Sloo. Refiriéndome separadamente a cada una de ellas, haré unas cuantas observaciones.

El 1° de marzo de 1842, el gobierno mexicano otorgó a don José de Garay el privilegio de abrir una ruta de comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico, a través del Istmo de Tehuantepec “por agua cuando fuera practicable y, excepto cuando no fuera así, utilizándose ferrocarriles y vehículos de motor”. Al quedar abierta esta línea de comunicación se declaraba con espíritu clarificador que sería “neutral y común para todas las naciones que estén en paz con la Republica Mexicana” Con objeto de capacitar al señor Garay para la realización de la empresa, Se le concedieron en dominio absoluto “todas las tierras desocupadas pertenecientes al gobierno dentro de una distancia de diez leguas a cada uno de ambos lados de la línea de comunicación” y después se estipulaba que “todos los extranjeros estaban facultados para adquirir en propiedad efectiva y ejercer cualquier comercio o reclamación, sin exceptuar la minería, dentro de una distancia comprendida en 50 leguas ubicadas a ambos lados de la línea de tránsito”.

A cambio de estas concesiones, Garay debía “entregar al gobierno, a partir del momento en que la ruta de comunicación quedara abierta para el transporte de efectos, una cuarta parte de las utilidades netas de los ingresos obtenidos con ese propósito, deduciendo los gastos de administración, preservación y reparaciones de la misma”.

Ningún tributo ni impuesto gravarían los artículos que pasaran en tránsito de océano a océano.

La concesión otorgada a Garay era generosa y de no haber sido anulada por el gobierno, es indudable que a la fecha existiría ya alguna comunicación a través del Istmo, fuera por medio de barcos de vapor o por ferrocarril.

La limitación de tiempo contenida en esta concesión en lo que respecta a la iniciación de la obra, fue ampliada del 1° de julio de 1844 al 19 de julio de 1845, fecha en que expiró y, de acuerdo con los términos expresos de dicha concesión “en el caso de que no se realizaran los trabajos iniciales dentro del tiempo especificado, el privilegio exclusivo por ella concedido a de Garay, cesaría”.

Más de 16 meses después de la expiración del plazo fijado, es decir el 5 de noviembre de 1846, el general don José Mariano de Salas, que en esa época desempeñaba el cargo de Jefe Supremo, después de haber combatido y derrocado con las armas al gobierno de Paredes, expidió un decreto en el que ampliaba el plazo a de Garay para el comienzo de las obras “por dos años más, contados a partir de la fecha de la publicación de dicho decreto”.

Lógicamente que el lapso de esa ampliación expiraba el 5 de noviembre de 1848, a pesar de que los poseedores de la concesión de Garay alegaban haber iniciado las obras antes de esa fecha y, en consecuencia, haber eludido la cancelación de la concesión.

En cualquier forma, el Congreso mexicano expidió un decreto el 23 de mayo de 1851, que declaraba que el decreto anterior, de fecha 5 de noviembre de 1846, se consideraba nulo e inexistente, “ya que las facultades que detentaba el gobierno provisional eran insuficientes para dictar un decreto de ese tipo”.

Mi propósito no consiste en establecer el derecho que asistía al Congreso mexicano para la anulación del decreto expedido por Salas o bien si las estipulaciones de la concesión fueron diligentemente atendidas en lo que se refiere a la iniciación de los trabajos. Las preguntas anteriores las encontrará usted plenamente aclaradas en los archivos de su legación.

Es cierto que este decreto del Congreso mexicano fue expedido después de un Tratado que tomó como base la concesión otorgada a de Garay, Tratado que fue firmado por los plenipotenciarios de los dos gobiernos, presentándose al Senado de Estados Unidos que unánimemente lo aprobó y ratificó con algunas enmiendas, devolviéndolo así al gobierno mexicano. El Tratado a que hemos aludido no ofrece ningún antecedente de la concesión Sloo.

El Congreso de México, el 14 de mayo de 1852, aprobó una ley que solicitaba proposiciones de contratistas para la apertura de la comunicación interoceánica al través del Istmo de Tehuantepec.

En cumplimiento de lo anterior, el 5 de febrero de 1853, el Presidente interino, Ceballos, ajustándose a la ley del 14 de mayo de 1852 y al decreto que solicitaba presentar proposiciones, publicado el 29 de julio de 1862, aceptó las propuestas que habían sido presentadas por la compañía mixta, nacional y extranjera, bajo el nombre de “A. G. Sloo”. Dichas proposiciones se referían a la “apertura de la comunicación interoceánica a través del Istmo de Tehuantepec”. Precisamente ese mismo día —5 de febrero de 1853— se concertó y se firmó un contrato entre las partes, una copia del cual se adjunta a la presente.

En la cláusula 14 de dicho contrato se estipuló que “A. G. Sloo y Cía.”, como garantía otorgada por su parte para el cumplimiento de su compromiso, depositaría en la Tesorería mexicana la cantidad de \$ 600,000 de los cuales \$ 300,000 se depositarían de inmediato y el remanente en aportaciones mensuales de \$ 50,000 cada una.

Como consecuencia de que la firma “Sloo y Cía.” se vio imposibilitada para dar cumplimiento, del 7 al 10 de febrero de 1853, a la estipulación establecida, se celebró un convenio por medio del cual, con la licencia y la aprobación plena del gobierno de México, Francisco de Palezieur Falconnet, súbdito británico residente en México, cubriría la suma arriba señalada de \$ 600,000 a la Tesorería mexicana, aceptando letras de cambio pagaderas a su orden por la misma cantidad, las cuales serían descontadas por William D. Lee, en las oficinas de A. G. Sloo en Nueva Orleans. En el caso de falta de pago, motivado por cualquier causa, el privilegio a concesión otorgado por el gobierno mexicano

quedaba como fianza e hipoteca por esa cantidad a favor del señor Falconnet, con facultades para proceder en forma sumaria y extrajudicial y realizar la venta de la concesión “al mejor postor que podía ofrecer sin ninguna formalidad judicial o bien, adjudicársela a sí mismo, si así lo prefería, sin que los comparecientes a sus representantes tuvieran ningún derecho a presentar oposición o hacer reclamación alguna, ya que todos ellos, anticipándose al caso, le habían conferido el poder irrevocable más completo y las facultades requeridas por la ley, con toda la amplitud que legalmente requiere”.

Las letras fueron protestadas y nunca han sido pagadas. El señor Falconnet, el 2 de junio de 1853, se dirigió al gobierno mexicano comunicándole que era el poseedor legal de la concesión; empero, no recibió ninguna respuesta. Está asentado en una nota del señor Lettson, encargado de negocios de su Majestad Británica, dirigida a don Luis de la Rosa, ministro mexicano de Relaciones Exteriores, de fecha 22 de abril de 1856: “Que el señor Falconnet con miras de recuperar su dinero subsecuentemente, hizo una cesión legal de su privilegio a favor del señor Hargous de Nueva York, que el señor Falconnet por conducto de sus agentes, informó, el 8 de agosto de 1855, al gobierno mexicano sobre la cesión otorgada; pero, que el gobierno mexicano no dio respuesta a su comunicado y que el 5 de noviembre de 1855, los agentes del señor Falconnet volvieron a dirigirse al citado gobierno solicitando las respuestas a sus escritos de 2 de junio de 1853, 25 de febrero, 8 de agosto y 5 de noviembre de 1855.

“Que ninguno de estos comunicados recibió respuesta hasta el 26 de noviembre de 1855, fecha en que el señor Falconnet fue informado por el ministro de Fomento que dicho caballero había sido reconocido por el gobierno mexicano como el propietario del privilegio; empero, que la cesión otorgada a favor del señor Hargous, no queda reconocida”. En una nota de esa fecha del ministro, dirigida a los agentes del señor Falconnet, en respuesta a los comunicados arriba mencionados, se informaba de la que antecede, reconociendo al señor Falconnet como “el propietario de la concesión en cuestión, de acuerdo con el contrato también arriba mencionado de 10 de febrero; pero, no en lo que respecta

a la transferencia que hizo de sus derechos al señor Peter Amedee Hargous, como usted lo expresaba en su último escrito”.

En la nota del 22 de abril de 1856, a la que antes se aludió, el señor Lettson insiste, a nombre del señor Falconnet en su calidad de súbdito británico, que la concesión hecha por él a favor del señor Hargous debe reconocerse, como medio para recuperar sus \$ 600,000, y “que el plazo concedido en el 29 artículo del privilegio, naturalmente que deberá contarse sólo a partir del día 26 de noviembre de 1855 en el que le fueron contestadas por el gobierno mexicano, las numerosas instancias del señor Falconnet”.—26 de noviembre de 1855.

Esta suma nunca le ha sido repuesta al señor Falconnet, no obstante de que, no estando en posesión de su dinero, el contrato no podía haber sido otorgado. Ni siquiera existen apariencias de algún intento tendiente a resarcir a la parte inocente, que no tiene ningún interés en la transacción. Muy lejos de lo anterior, se puede inferir del artículo 9 de la escritura constitutiva de acuerdo con la legislación de Lousiana, de la compañía de Tehuantepec, “fundado sobre la base de la concesión de Sloo”, que no existe ninguna intención de devolver este dinero hasta que el monto sea recibido por la compañía proveniente de las utilidades que rinda el camino. En tal virtud, el señor Falconnet con poderosas razones aparentes, reclama ahora ser el propietario de la concesión Sloo, de acuerdo con el reconocimiento del gobierno mexicano que, sin embargo, le negó el derecho de transferencia a favor del Sr. Hargous.

En cualquier caso, parece que la transacción consiste en una hipoteca sobre derechos absolutos; ni el señor Sloo ni la compañía de Tehuantepec, privarán al señor Falconnet de sus derechos a la concesión, hasta tanto no reintegren el dinero pagado por el señor Falconnet al gobierno mexicano, además de los intereses y daños.

El 21 de junio de 1853, sin oponerse a la falta de pago de las letras firmadas por A. G. Sloo, él y sus asociados se organizaron bajo el membrete de Compañía de Tehuantepec, acogiéndose a la ley del estado de Louisiana, promulgada en 1852.

La 2º cláusula del contrato celebrado con el gobierno mexicano, el 5 de febrero de 1853, requiere que los contratantes “inicien un camino

maderero, en el punto donde el río Coatzacoalcos deja de ser navegable, en el año en que se celebró este convenio y que se termine tres años después de su iniciación. Empezar la construcción de un ferrocarril dentro de un plazo de un año, a partir de esta última fecha y concluir el mencionado ferrocarril, con todos los carros y máquinas necesarios, en los cuatro años siguientes, notificándosele al Supremo Gobierno, en ambos casos, es decir, la apertura y la terminación de las obras”.

De acuerdo con el artículo 149 se estipula que “el contratista se hace acreedor a una sanción por la que pierde todos los gastos ya erogados, los materiales y herramientas que se hayan reunido en el territorio de la República y los derechos concedidos por medio del contrato, cuando no inicie y termine el camino y el ferrocarril dentro del mismo tiempo estipulado”.

El gobierno mexicano actuó inteligentemente al pedir la construcción de un camino antes de la terminación del ferrocarril, ya que el primero puede construirse rápidamente a través del Istmo, si se toma en cuenta la naturaleza del suelo y la cantidad de madera que proporciona. El mundo comercial así como la República Mexicana recibirían grandes beneficios con la apertura de ese tránsito. En esta forma podrían esperar la construcción de un ferrocarril perfecto y permanente.

La Compañía Tehuantepec ha violado su compromiso y, por lo tanto, ha perdido los derechos que el contrato le confiere, al no haber iniciado aún la construcción del camino. Nunca ha colocado ni una tabla sobre la ruta y es probable que nunca tenga la intención de hacerlo. En su título de propiedad, que se ajusta a la legislación de Louisiana, artículo 2°, no aluden en absoluto al camino carretero y simplemente declaran que la “sociedad queda constituida teniendo por propósito la construcción de un camino real”.

Sin embargo, la compañía arguye que “han construido un camino para transportes, no un camino de madera, que atraviesa el Istmo y que el tránsito total se efectuó el 4 de febrero último, fecha que sólo era un día después de vencido el plazo prescrito por la concesión original”. Aun cuando lo anterior fuera suficiente, lo que claramente no lo es de acuerdo

con el memorial del Presidente y de los directores de la Compañía de Tehuantepec, fechado en Nueva Orleáns el 9 de mayo último, ellos no esperan que el camino real esté disponible para carga y pasajeros antes del 19 de octubre próximo.

Empero, se aduce que el gobierno mexicano ha aceptado lo hecho por la compañía, considerándolo como el cumplimiento del contrato original y que ha renunciado a la construcción del camino de madera. No he observado pruebas suficientes al respecto; pero, aun cuando hubiera bases sólidas para creerlo, no podría haberse hecho sin contar con el consentimiento del gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con el artículo 8º del Tratado celebrado con México el 30 de diciembre de 1853, Estados Unidos adquirió un interés común con México por lo que se refiere a “la pronta construcción de un camino de madera que atravesase el Istmo de Tehuantepec”, y sin nuestro consentimiento, no puede legítimamente ser renunciado un derecho establecido en el contrato.

Estados Unidos tiene un profundo interés en la rápida construcción del camino y no le interesa más que en muy pequeña escala quién sea el que ejecute la obra. Si la compañía existente estuviera en condiciones y deseara abocarse a la tarea, gustosamente olvidamos todas sus pasadas negligencias en el cumplimiento de su deber y la estimulamos para proseguir adelante. Sin embargo, me olvidaba expresar que sería casi imposible que el ferrocarril fuera construido por ellos.

De acuerdo con el título de propiedad, el capital es de \$ 10'000,000 dividido en 100,000 acciones de \$ 100 cada una. 50,000 acciones o sea el 50%, según lo expresa el título, “deberán quedar en poder y retenerlas A. G. Sloo y sus representantes, considerándosele totalmente pagado como compensación del contrato”.

La mitad del capital se le entrega al señor Sloo como bonificación por haber obtenido el contrato y queda totalmente congelado en lo que se refiere a fondos para la construcción de la carretera.

En lo que respecta a las 50,000 acciones remanentes, sin que lleguen a poder de particulares, es bastante evidente que desde el punto de vista del título, apenas una pequeña porción de las mismas quedará disponible para el propósito antes señalado. En realidad no se ha sabido

que se haya mencionado ni pagado ninguna instalación utilizando el capital suscrito. Por el contrario, existen razones de peso para suponer que los señores Sloo y Cía. inventaron construir la carretera sin utilizar los medios derivados del capital, sino a través de empréstitos de Europa garantizados con el propio ferrocarril. Aun cuando lo anterior hubiera sido factible en la fecha en que se extendió el título, actualmente resulta imposible debido a los altos tipos de interés que prevalecen en Londres y París.

Puede usted ver que las complicaciones son interminables y que los derechos de ambas partes no son claros y, en consecuencia, la construcción de esa importante carretera internacional se ha visto frustrada. Sin embargo, es justo observar que la demanda que sustenta mejores bases es la del señor Falconnet.

Empero, las perspectivas para la construcción no son más brillantes debido a que el señor Falconnet, la Compañía de Tehuantepec y los propietarios de la concesión Garay, han unificado sus intereses y no buscan frente al gobierno mexicano, obtener las modificaciones, en la concesión Sloo, necesarias para garantizar la construcción de la carretera. Si se logran dichas modificaciones, confidencialmente se sabe que se proveería de capital, energía y empresas suficientes para realizar el objetivo.

El honorable J. P. Benjamin, senador del Congreso de Louisiana y Emile La Sere, alcalde de Nueva Orleans, que es el presidente de la Compañía de Tehuantepec, se trasladarán a México con ese propósito y el último le dará a usted instrucciones al respecto. Llevarán con ellos y entregarán a usted copias de los convenios celebrados con las partes respectivas anteriormente mencionadas, la escritura de asociación respectiva y una nueva acta constitutiva basada en la ley de Louisiana.

El capital de la nueva compañía será de \$ 10'000,000, dividido en acciones, cada una de ellas con un valor de \$ 100. Ocho millones de dicho capital quedarán abiertos para suscripciones. Los 2'000,000 restantes se utilizarán en su totalidad para pagar certificados de capital, juntamente con 1'000,000 de bonos al 8% serán entregados a las partes habilitadas totalmente para la transferencia a la nueva compañía de la

concesión Garay, de todos los derechos de la actual Compañía de Tehuantepec. Todos sus valores en propiedad, trabajos realizados, en síntesis, cualquier objeto perteneciente a ellos o a cualquiera de ellos, que se encuentre en el Istmo o cualquier otra parte, pasarán a poder de la nueva compañía, de tal forma que al surgir se encuentre relevada y descargada de toda responsabilidad, sea cual fuere, excepto la propia demanda del señor Sloo, que se sobrentiende que no ha abierto ningún juicio en contra de la compañía existente y niega que el presidente y los directores de dicha Compañía representen imparcialmente o con justicia a la concesión Garay.

No se distribuirán ningunas utilidades provenientes del transporte de pasajeros, mercancías y otros artículos a través del Istmo, hasta tanto no esté terminado el ferrocarril; sin embargo, éstas se aplicarán fielmente para su construcción. En ningún periodo se otorgarán dividendos que excedan al 15% de sus existencias de capital y, cuando los derechos de portazgo excedan estas cuotas, los peajes se reducirán al tanto fijo del 15%. Naturalmente que la nueva compañía tomará la responsabilidad de todos los contratos aceptados por la antigua Compañía por lo que se refiere a coches correo, carros de equipaje, así como a construcción de puentes, la terminación de la carretera, levantamiento de muelles y suministro de botes de vapor para la navegación en el río Coatzacoalcos. Igualmente, resarcirá al señor Falconnet los \$ 600,000 que le anticipó al gobierno mexicano; pero se indemnizará a sí misma utilizando los intereses del gobierno derivados de las utilidades netas de la compañía, en la forma estipulada en la concesión Sloo.

He expresado las características generales del nuevo convenio, debido a que aún no ha sido redactado por escrito en su totalidad. El mencionado convenio brinda poderosas razones que nos hacen pensar en que, de acuerdo con él, se realizará la construcción del ferrocarril. La rémora principal radica en la controversia entre el señor Sloo y la compañía actual que está en posesión de las obras del Istmo que ha continuado los trazos, cuyo costo es considerable. Es de esperar que esta controversia quedé amistosamente liquidada entre las partes. Por medio de la presente, se le imparten instrucciones, a solicitud de los señores

Benjamin y La Sere, en el sentido de que ponga en conocimiento del gobierno mexicano el objeto de su misión y, además, que proporcione a dichos señores la ayuda necesaria que a su juicio sea la más aconsejable y efectiva para cumplir su cometido.

Ellos también pueden serle útil en lo que se refiere a la obtención de las cesiones del territorio de México, que mencionan sus instrucciones. En caso de que lo juzgue pertinente, puede utilizar sus servicios para ese propósito. Ambos son caballeros de gran carácter y de sentimientos patrióticos y desean, sin la menor duda, realizar todo lo que esté de su parte, con el consentimiento de usted, a fin de que tengan buen éxito sus negociaciones. Pero, en éste asunto, exclusivamente usted es juez.

Sin intención de decidir en forma positiva cuáles son los derechos que han sido reconocidos por el gobierno al señor Falconnet, como anteriormente se expresó, se le giran instrucciones en el sentido de que debe insistir en que el gobierno conceda un reconocimiento similar a cualquier ciudadano o empresa norteamericanos, que hayan comprado o puedan comprar la concesión del señor Falconnet. No podemos aceptar que se establezca ninguna distinción a favor de súbditos británicos en relación con los ciudadanos estadounidenses.

Pero, sean cuales fueren los derechos de las partes que crean los conflictos de las concesiones mexicanas, el interés del gobierno y del pueblo de Estados Unidos demanda que el derecho permanente del camino a través del Istmo, quede establecido sobre la base de un tratado. Para ese propósito, le transmito los artículos que deben presentarse al gobierno mexicano.³

El 1º de estos artículos, después de confirmar las estipulaciones a favor de Estados Unidos, en el artículo 8º del Tratado de diciembre de 1853 y haciéndolo aplicable a cualquier compañía o individuos que puedan construir el camino, contiene una cesión expresa de los derechos

³ En la parte final de estas instrucciones se reproduce el proyecto de los artículos del Tratado, en su traducción al español, turnado del Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

de tránsito a través del Istmo, a favor de Estados Unidos y sus ciudadanos en los términos más generales y completos, reservándose, sin embargo, el derecho de soberanía a la República Mexicana.

Este artículo, con una única excepción, se concreta a hacer substancialmente vigente el Tratado de 1853, asegurando “beneficios estables del mencionado camino de tránsito, a las personas y mercancías de los ciudadanos y norteamericanos” y prohíbe a cualquiera de los gobiernos interponer “cualquier obstáculo al tránsito de personas y mercancías de ambos países”.

La excepción a la que se ha aludido, está contenida en la estipulación que establece que este derecho de tránsito “se utilizará y disfrutará en forma similar y bajo términos iguales por parte de ambas repúblicas”, en tanto que el artículo 8° del Tratado de diciembre de 1853, únicamente establece que “en ningún momento se harán gravitar cargos más elevados sobre el tránsito de personas y propiedades de otras naciones extranjeras”.

Seguramente que es razonable y equitativo que Estados Unidos, sobre el principio de mutua equivalencia, debía colocarse en un plano de igualdad con México en lo que respecta al uso y disfrute del tránsito. Mediante los artículos que prosiguen, aceptan ampliar su protección a otras rutas de comunicación a través del Istmo y garantizar la neutralidad de dichas rutas así como obligarse a ejercer su influencia ante otros países para obtener de ellos una garantía similar de neutralidad.

Estas son obligaciones de importancia y responsabilidad, sin las cuales sería difícil obtener el capital necesario para la construcción del camino y, tornando lo anterior en consideración, justamente reclamamos estar colocados al mismo nivel de México.

Pero no nos concretamos a desear lo anterior solamente para nosotros mismos, como lo podrá usted percibir en los artículos siguientes, sino también para las otras naciones. Queda prevista una igualdad perfecta para los ciudadanos y súbditos de todos los países con respecto a los ciudadanos de México en lo que se refiere a gravámenes y peajes que se impongan en el ferrocarril o cualquiera otro medio de comunicación a través del Istmo.

El ferrocarril proyectado constituirá una vía pública para todos los países comerciales del mundo y ya ha pasado la época en que pacientemente puedan tolerarse ningún tipo de restricciones sobre la vía pública en beneficio de una nación y en perjuicio del resto de los países. La práctica acostumbrada por las naciones comerciales modernas, que se basa en la política más justa, repudia la idea consistente en hacer discriminaciones favorables a cualquier país en particular en las grandes rutas del comercio internacional. Además, el liberalismo es la verdadera política de México. El ferrocarril le permitirá competir con buen éxito con el ferrocarril de Panamá y otras rutas rivales situadas a través del Istmo. Después de todo, su posición geográfica le ofrecerá grandes y especiales ventajas por medio del ferrocarril del que no puede ser desprovisto. La naturaleza se lo ha garantizado y, por este simple hecho, debiera estar satisfecho.

De acuerdo con las instrucciones, esos son los puntos de vista con los cuales debe presionar enérgicamente al gobierno mexicano y confiadamente se espera que usted tendrá buen éxito. Si fracasara en sus esfuerzos realizados a favor de otras naciones, se considera que podrá obtener una igualdad para Estados Unidos frente a México. Contra nuestra voluntad, aceptamos ese punto. Si podemos triunfar, la igualdad con todos los otros países sobrevendrá en breve.

Artículo 2° —He anticipado en las observaciones anteriores mucho de lo que tengo que expresar en relación con este artículo. Estipula que el gobierno mexicano establecerá dos puertos libres, uno en cada extremo del Istmo, en los que ningún derecho de tonelaje u otros impuestos sobre los efectos a mercancías pertenecientes a ciudadanos a súbditos de cualquier otro país que pasen exclusivamente en tránsito de océano a océano y que no sean destinados para el consumo de México. El motivo, simultáneamente, trae a la mente la oposición tanto en contra de la injusticia como de lo impolítico que resulta cualquier intento por parte de México, de elevar un ingreso por medio de derechos de tonelaje u otros impuestos sobre los artículos que ampliamente pasaban en tránsito por la ruta. Sin embargo, lo anterior debe quedar expresamente estipulado en el Tratado, para evitar toda disputa futura. En relación a los

tres puertos, no obstante que se les juzga importantes, puede aceptarse la negativa, si México persisten rehusar a establecerlos,

Se había considerado que, de acuerdo con el Tratado de diciembre de 1853, el administrador general de correos ostentaba el derecho de celebrar un contrato que permitiera transportar la correspondencia de Estados Unidos en valijas cerradas a través del Istmo; ahora, para evitar problemas futuros, se juzga conveniente insertar una cláusula de ese tipo, tal como se propuso en el Tratado.

El artículo 3° se concreta a poner en vigor y hacer extensivas a todas las rutas de comunicación que actualmente o en fecha posterior existan a través del Istmo, las disposiciones siguientes del artículo 8° del Tratado de diciembre de 1853.

“Cuando sea necesario, conviene México en valerse de una fuerza militar suya para proteger a las personas y propiedades que transiten para dicha ruta; pero, faltando en ello, el gobierno de Estados Unidos, usando de su arbitrio, podrá usar sus fuerzas con el mismo fin, reiterándolas luego que se concluya la necesidad”.

Por el motivo anterior, no es de suponer que presenten objeciones a dicho artículo. En el caso de que la desconfianza del gobierno mexicano, a pesar de todo, interponga obstáculos infranqueables, la parte final del artículo puede quedar redactada como sigue: “Pero, faltando en ello, el gobierno de Estados Unidos, usando de su arbitrio, podrá” hacer extensiva su protección a todas a cualquiera de esas rutas, de acuerdo con las disposiciones del artículo 8° del Tratado de diciembre de 1853 celebrado entre Estados Unidos y México.

Artículo 4° —Se refiere exclusivamente a las tropas, provisiones militares y pertrechos bélicos pertenecientes a ambos gobiernos. No ejercerá ningún efecto lesivo sobre el comercio general de los ciudadanos o súbditos de ningún país.

México y Estados Unidos son las dos naciones sobre las cuales y sobre sus ciudadanos, gravitará principalmente la construcción, preservación y protección del camino, ya que son los más interesados en su realización.

Por lo tanto, no debe juzgarse irrazonable que sus tropas,

provisiones militares y pertrechos de guerra deban transportarse libres de peaje; este derecho respecto a Estados Unidos, restringido a ese tipo de tropas, provisiones militares y pertrechos bélicos que puedan pasar en tránsito entre sus posesiones del Atlántico⁴ ¿y del Pacífico? En el caso de que no sea posible que el gobierno de México acepte esa parte del artículo a favor de Estados Unidos, puede modificarse en tal forma que prescriba que las tropas estadounidenses únicamente transitarán libres del pago de peaje, pagando sus provisiones y pertrechos de guerra el 50% de las tarifas establecidas.

Artículo 5º —Es casi seguro que el ferrocarril que atravesase el Istmo, de estar adecuadamente dirigido, eventualmente se convertirá en una inmensa fuente de ingresos para los accionistas. En consecuencia este artículo propugna evitar que dichas utilidades resulten exageradas a fin de proteger a los ciudadanos y súbditos de todos los países.

Deseo hacerle entender a usted que el ejercicio de cualquier influencia por su parte a favor de las modificaciones de la concesión Sloo, que se tratan de obtener del Gobierno mexicano por parte de los Sres. Benjamin y La Sere, deben ajustarse a las estipulaciones previstas en los artículos anteriores.

Es así como el Presidente, confiando en su patriotismo y aptitudes, le ha confiado a usted una negociación de suma importancia. De lograr su buen éxito, sería algo productivo de grande y permanente beneficio para su país y le daría derecho para que su nombre apareciera en la lista de los diplomáticos más distinguidos.

Soy, etc....

Lewis Cass

⁴ En la copia de estas instrucciones, las palabras “y Pacífico” no aparecen escritas con tinta, pero, después de la palabra “Atlántico” se ve una llamada y al margen están insertadas con lápiz las palabras “y Pacífico” seguidas de un signo de interrogación.

PROYECTO DE TRATADO RESPECTO DE TEHUANTEPEC,
QUE SE ENVIÓ ANEXO A LAS INSTRUCCIONES A FORSYTH
EL 17 DE JULIO DE 1857⁵

Artículo 1°.—En adición a las estipulaciones contenidas en el artículo VIII del Tratado entre Estados Unidos y la República Mexicana, fecha 30 de diciembre de 1853, todas las cuales se confirman en éste, sin atender por cuál compañía o individuos pueda ser construido el camino de tablones y el ferrocarril, o los dos mencionados en él, la República Mexicana, por el presente, cede en perpetuidad a los Estados Unidos y a sus ciudadanos y propiedades, el derecho de vía o tránsito a través del Istmo de Tehuantepec de océano a océano, por ferrocarril a alguna otra vía de comunicación natural o artificial por tierra o agua, que ahora o en el futuro exista o pueda construirse, para que sea usada y disfrutada de la misma manera y en iguales términos por ambas repúblicas y sus respectivos ciudadanos, reservándose, sin embargo, la República Mexicana, su derecho de soberanía sobre el mismo.

Artículo 2°.—Los Estados Unidos, por el presente, convienen en extender su protección al ferrocarril y todas las otras vías de comunicación a través de dicho Istmo y a garantizar la neutralidad del mismo. También convienen en emplear su influencia para con las demás naciones a fin de inducir las a garantizar tal neutralidad. Y la República Mexicana, por su parte, por el presente, emprende —toma a su cargo— entre...⁶ desde el cambio de las ratificaciones de este Tratado, para establecer dos puertos libres, uno en el Golfo de México en el lado oriental y el otro en el Pacífico, en el lado occidental del Istmo de Tehuantepec, en los que no se impondrán por el gobierno mexicano

⁵ Esta minuta de la traducción se localizó en el Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se cotejó con el texto inglés del Dr. Manning, encontrándolo correcto.

⁶ En blanco en el manuscrito.

derechos de tonelaje u otros, sobre los efectos a mercancías pertenecientes a los ciudadanos o súbditos de los Estados Unidos o algún otro país, conducidos *bona fide* de tránsito a través del Istmo y no para consumirse entre los territorios de México. Y no impondrán otras cargas ni derechos de paso, ni serán más altos, sobre la conducción o tránsito de personas y propiedad de los ciudadanos de Estados Unidos a súbditos de algún otro país, a sobre el camino de hierro o alguna otra vía de comunicación a través del Istmo, que las impuestas a las personas y propiedad de los ciudadanos mexicanos.

Y la República Mexicana reconoce el derecho del administrador general de correos de Estados Unidos para hacer contratos con los individuos a compañías, para el transporte del correo de Estados Unidos a través del Istmo, en valijas cerradas, no conducidas para la distribución a lo largo de la línea de comunicación libre de imposición de todos derechos por el Gobierno mexicano.

Artículo 3° —El Gobierno mexicano conviene en que, si llegase a ser necesario en algún tiempo emplear la fuerza militar para la seguridad y protección de las personas y propiedad que pasen por estas vías o alguna de ellas, empleará la fuerza requerida para ese objeto; pero en la imposibilidad de hacerlo por cualquiera causa, el gobierno de Estados Unidos puede, a su propia discreción, emplear tal fuerza para éste y no otro objeto, y, cuando la necesidad cese, dicha fuerza será retirada inmediatamente.

Artículo 4° —La República Mexicana y Estados Unidos convienen mutuamente en que ningunas cargas ni derechos de paso serán impuestos sobre algún ferrocarril u otra vía de comunicación por la conducción en ella de las tropas mexicanas, almacenes militares y municiones de guerra; ni la de tropas, almacenes militares y municiones de guerra de Estados Unidos, de tránsito, yendo o viniendo entre sus posesiones del Atlántico y Pacífico.

Artículo 5° —Ni la compañía que ahora existe, ni la que pueda establecerse en lo sucesivo para la construcción del ferrocarril o alguna

otra vía de comunicación a través del Istmo de Tehuantepec, dividirá⁷ jamás más que en proporción del 15% al año a sus accionistas de los derechos colectados sobre el mismo, y cuando quiera que se halle que la proporción de lo colectado excede su monto, serán reducidos a la regla del 15% al año.

⁷ Se quiso decir, recibirá dividendos.

PROPOSED TREATY ARTICLES

Article 1. In addition to the stipulations contained in the 8th. Article of the Treaty between the United States and the Mexican Republic, dated the 30th. of December 1853, all of which are hereby confirmed, no matter by what company or individuals, the Plank and Rail Road, or either of them therein mentioned may be constructed, the Mexican Republic hereby cedes to the United States in perpetuity and to their citizens and property the right of way or transit across the Isthmus of Tehuantepec from ocean to ocean over any Rail Road or other route of communication natural or artificial, whether by land or by water which may now or hereafter exist or be constructed 'to be used and enjoyed in the same manner and upon equal terms by both Republics and their respective citizens, the Mexican Republic, however, reserving its right of sovereignty over the same.

Article 2. The United States hereby agree to extend their protection to any such Rail Road and to all other routes of communication across the Isthmus aforesaid and to guarantee the neutrality of the same. They also agree to employ their influence with other nations to induce them to guarantee such neutrality. And the Mexican Republic, on its part, hereby undertakes within from the exchange of the ratifications of this Treaty, to establish two free ports, one on the Gulf of Mexico on the Eastern and the other on the Pacific on the Western side of the Isthmus of Tehuantepec, where no tonnage or other duties shall be imposed or levied by the Mexican government on any effects or merchandise belonging to citizens or subjects of the United States or of any other country intended bona fide for transit across the Isthmus and not for consumption within the Territories of Mexico. And no higher or other charges or tolls shall be imposed on the conveyance or transit of persons and property of citizens or subjects of the United States of any other country on or over any Rail Road or other route of

communication across the Isthmus than are imposed on the persons and property of Mexican citizens. And the Mexican Republic recognizes the right of the Postmaster General of the United States to enter into contracts with individuals or companies to transport the mails of the United States, across the Isthmus, in closed bags, not intended for distribution along the line of communication, free from the imposition of all taxes or duties by the Mexican Government.

Article 3. The Mexican Republic agrees, that, should it become necessary any time to employ military force for the security and protection of persons and property passing over these routes or any of them, it will employ the requisite force for that purpose; but upon failure to do this for any cause whatever, the Government of the United States may, in its own discretion, employ such force, for this and for no other purpose and when the necessity ceases, such force shall be immediately withdrawn.

Article 4. The Mexican Republic and the United States mutually agree that no charges or tolls whatever shall be imposed upon any Rail Road or other route of communication for the conveyance over it Mexican troops, military stores and munitions of war nor of troops, military stores and munitions of war of the United States, passing in transit, backwards and forwards, between their Atlantic [and Pacific?] possessions.

Article 5. No Company now in existence or which may hereafter established for the construction of a Rail Road or any other route communication across the Isthmus of Tehuantepec shall ever divide ore than at the rate of fifteen per cent per annum to its stockholders from tolls collected upon the same: and whenever the rate of tolls shall be found to exceed this amount, they shall be reduced to the standard of 15 per cent per annum.

TÍMIDAMENTE FORSYTH PRESENTA AL GOBIERNO
MEXICANO LOS DOS PROYECTOS DEL TRATADO

—Extracto—

México, septiembre 5 de 1857

Sr., Sebastián Lerdo de Tejada,
Ministro de Relaciones Exteriores de México.

El infrascrito, enviado extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos, acatando las instrucciones de su gobierno, tiene el honor de inquirir a su excelencia, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de México, sobre la posibilidad de que él decida en las negociaciones que abarcan los aspectos siguientes:

Primero. El establecimiento de fronteras entre ambos países hasta donde lo permitan los límites naturales y para la preservación de relaciones amistosas que felizmente aún existen entre ambos países...⁸

Segundo. El segundo objetivo de las negociaciones se refiere al Istmo de Tehuantepec. Debido a que resulta imposible describir dichos objetivos en forma más sucinta de lo que aparecen en el proyecto del Tratado propuesto, el infrascrito le adjunta a S. E. una copia del mismo.

Con el propósito de evitar malos entendimientos e innecesarias explicaciones subsecuentes, el infrascrito tiene el honor de manifestar que las concesiones que se relacionan con Tehuantepec, separadamente de que involucren el cambio de las fronteras de ambas Repúblicas, no van acompañadas del ofrecimiento de una compensación pecuniaria.

⁸ En la parte omitida se revisan las disposiciones del proyecto de un Tratado sobre límites, que va adjunto a la nota de fecha 17 de julio de 1857.

En el caso de que el gobierno de México se incline a tomar en consideración una negociación sobre el Tratado que involucra los objetivos sucintamente esbozados en esta nota, el suscrito está dispuesto, ajustándose a los deseos de su excelencia a celebrar una conferencia destinada a esa finalidad.

El infrascrito aprovecha la oportunidad, etc.

John Forsyth
Ministro de Estados Unidos en México

SE CONCEDE PRIVILEGIO A LA COMPAÑÍA DE LA
LOUISIANA DE TEHUANTEPEC PARA LA APERTURA
DE LA COMUNICACIÓN INTEROCEÁNICA

Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio
de la República Mexicana.—Sección 5ª

El excelentísimo señor Presidente de la República se ha servido dirigirme
el decreto que sigue:

Ignacio Comonfort, Presidente de la República Mexicana, etc.

Artículo 1º —Se concede privilegio a la compañía formada en Nueva
Orleáns en 30 de julio del presente año, llamada “Compañía de la
Louisiana de Tehuantepec”, para la apertura de la comunicación
interoceánica, por el Istmo de ese nombre, con las condiciones
expresadas en este decreto.

2º —La compañía tendrá obligación de hacer la comunicación
por agua, en la parte navegable del río Coatzacoalcos y, en donde ella
concluya, principiarán los caminos a que se refieren los dos artículos
siguientes.

3º —La compañía deberá construir un ferrocarril que comenzará
a los dieciocho meses, contados desde la fecha de este decreto, teniendo
terminado en cada año un tramo de diez leguas, hasta la conclusión de
toda la línea.

4º —Entretanto concluye la compañía el camino de fierro, estará
obligada a conservar en buen estado de servicio, un camino cómodo y
con los puentes necesarios para el tránsito de carruajes que conduzcan
pasajeros y mercancías de poco peso.

5º —Hechos los reconocimientos necesarios y levantados los

planos de la ruta general por los ingenieros, se presentarán al Ministerio de Fomento para su aprobación.

6° —La compañía deberá construir por su cuenta, en los dos años siguientes a la fecha en que concluya el ferrocarril, los muelles y diques necesarios para el uso de la vía de comunicación en los puertos de Coatzacoalcos y de La Ventosa, habilitados para el comercio de altura. Desde luego harán las obras precisas para facilitar la descarga de los buques y evitar la avería de las mercancías.

7° —El Gobierno concede a la compañía el terreno necesario para la carretera y el ferrocarril, muelles, diques, almacenes, depósitos, estaciones, cobertizos para diligencias y demás carruajes y hoteles para transeúntes; pero si las tierras del dominio público no fueren suficientes para todos estos objetos, las tomará la compañía del de los particulares, indemnizando ella a los dueños conforme a las leyes.

8° —La compañía podrá tomar gratis de las tierras que fuesen del dominio público, los materiales necesarios para la construcción del camino o de sus pertenencias y para su conservación. Si los materiales se hallaren en terrenos de particulares, podrán usarlos también, pero indemnizándolos conforme a las leyes.

9° —Se concede a la compañía privilegio exclusivo de transporte por la vía de comunicación pudiendo, en consecuencia, cobrar peaje y cualquiera otro derecho por fletes de mercancía a costos de pasaje, sin que la tarifa que se fije por la compañía exceda de cincuenta centavos por legua, para cada pasajero, de tres centavos por legua para cada arroba de mercancías, y de uno por ciento del valor de los metales preciosos o de las alhajas que transporten, entendiéndose esta última asignación para toda la travesía del camino.

10° —El Gobierno no exigirá impuesto ni contribución alguna, ya sea sobre el tránsito de mercancías, ya sea de los pasajeros y ya, en fin, por los capitales invertidos en el camino, pero la compañía tendrá obligación de pagarle mensualmente 12 centavos por cada uno de los pasajeros o de los bultos que transporte por la vía general.

11° —Durante el tiempo necesario para la construcción del camino, la compañía podrá importar al Istmo, libres de derechos, los

materiales, máquinas, herramientas, carruajes y útiles necesarios para la construcción y conservación de la vía y de sus pertenencias, así como los objetos de primera necesidad que no se encuentren en el Istmo y para la manutención y vestido que puedan necesitar los trabajadores y peones empleados en el camino. Pasado aquel término, sólo podrá introducir libres de derechos, las máquinas, carros y carriles que necesiten para el camino, durando esta exención el tiempo del privilegio y haciendo uso de ella, así como de la anterior, la compañía, según las reglas que se dicten por el Ministerio de Hacienda.

12° —El Gobierno protegerá con todo su poder la prosecución, conservación y seguridad de los trabajos.

13° —La facultad concedida a la compañía para el transporte de mercancías, se reglamentará por el ministerio de Hacienda, procurando evitar los abusos y, principalmente, facilitar la pronta expedición de aquellas, sin que se entienda por esa facultad, que la compañía tiene derecho de abrir su expendio en ningún punto del Istmo.

14° —El Gobierno conservará abiertos y habilitados para el comercio de altura, los puertos de Coatzacoalcos en el Golfo de México y de La Ventosa en el Pacífico.

15° —La compañía tendrá obligación de construir faros de primera clase en los dos extremos de las vías y otro en el puerto de Acapulco, debiendo quedar concluidos dentro de siete años los primeros y el tercero dentro de diez, contados desde esta fecha, las que serán de la pertenencia exclusiva del Gobierno. Tendrá también obligación de ahondar la barra de Coatzacoalcos y el cauce del río, si fuere posible, los planos que serán aprobados por el ministerio de Fomento.

16° —El presente privilegio durará sesenta años, contados desde esta fecha y en todo ese tiempo, el Gobierno recibirá un quince por ciento de las utilidades líquidas de la vía general, siempre que se hagan dividendos a los accionistas. En todo ese tiempo, las exenciones y demás derechos concedidos a la compañía por este decreto, serán valederos y exclusivos, sin que puedan alterarse, excepto por mutuo consentimiento y al fin de los sesenta años, el Gobierno entrará en plena y absoluta posesión del camino, con todos sus trenes —que cuando menos deberán

ser los necesarios para poder transportar al día quinientos pasajeros y diez mil arrobas de carga— útiles y pertenencias; entendiéndose, que tanto aquéllas como el camino, deben entregarse en corriente y en perfecto estado de servicio; debiéndose hallar los rieles, carros, máquinas y utensilios, cuando menos de medio uso y sin que se entiendan incluso los buques y vapores.

17° —La compañía se hará cargo de pagar a Mr. Francisco P. Falconnet los seiscientos mil pesos con los réditos que le correspondan, prestados a la empresa Sloo para que cumpliera con la condición que se le impuso en el artículo 149 del contrato de 5 de febrero de 1853, libertando al Gobierno de toda responsabilidad futura y sin disminuir por esto la parte de utilidades que le pertenezcan, según la regla fijada en el artículo anterior.

18° —La compañía estará obligada a llevar a cualquier punto, en todo el tránsito del camino, libres de gastos, la correspondencia que debe transitar por él, recibéndola y entregándola con las formalidades de estilo. De la misma manera transportará todos los frutos y objetos que sean propiedad del Gobierno, por la mitad de la tarifa. Igualmente conducirá, sin estipendio alguno, en ida y vuelta, los oficiales, tropas, empleados o agentes del gobierno general o de los estados, cuando caminen por causa del servicio público. Los metales y productos agrícolas e industriales de la República, serán transportados por un veinticinco menos del precio de tarifa, sujetándose a las reglas que se dicten por el ministerio de Hacienda.

19° —El Gobierno nombrará dos de los nueve directores de la compañía con las mismas facultades y prerrogativas de éstos; podrá también constituir en el Istmo una comisión que vigile las obras y trabajos que se emprendan, en conformidad de este privilegio.

20° —Se imponen a la compañía las restricciones siguientes: 1ª —No podrá construir fortaleza en el Istmo, ni organizar fuerza armada de ninguna clase; tampoco dará pasaje a fuerza alguna armada, ya sea nacional a extranjera, sin expresa autorización del gobierno general. 2ª —Despedirá inmediatamente de su servicio a cualquiera de sus dependientes que haga a proteja el contrabando o cometa cualquier

delito, auxiliando al Gobierno para su persecución. 3ª —Pondrá en ejecución lo medios que se le designen por el gobierno general, para que todo pasajero observe las leyes aduanales de la República.

21º—La compañía, así como todos los extranjeros que tomaren parte en ella como accionistas o con algún otro título que les diera derecho para intervenir en sus operaciones, participar de sus productos a reclamar alguna de sus concesiones, no tendrán más derecho que los mexicanos, ni otros medios de hacerlos valer que los que a éstos concedan las leyes de la República. Todas las cuestiones de esta naturaleza y las que se susciten sobre la adquisición, conservación o pérdida de las acciones o derechos sobre el indicado camino, se decidirán por los tribunales nacionales competentes, conforme a las leyes. A las mismas condiciones se sujetarán los empleados y dependientes de la compañía.

22º —La restricción del artículo anterior no tendrá lugar en las disensiones a diferencias que se susciten entre extranjeros accionistas y fuera de la República, en cuyo caso se examinarán y decidirán como si la restricción no existiese; pero sin que las decisiones de los tribunales extranjeros afecten, en manera alguna, a las prescripciones de este decreto, a los existentes de la compañía concesionaria del privilegio, que se reputa mexicana para todos los efectos de la concesión y a los intereses mexicanos.

23º —La compañía no podrá traspasar, enajenar ni hipotecar este privilegio, sin previo consentimiento del Gobierno, ni admitirá en ningún caso, como socio, a un gobierno o estado extranjero.

24º —El tránsito por la vía de comunicación será libre para todos los habitantes del globo; pero se aumentará un veinticinco por ciento a las mercancías de las naciones que no celebrasen tratado de neutralidad con México.

25º —La compañía abrirá un registro en México, por un periodo de cuatro meses, para que los nacionales tomen acciones en la empresa y a los que se reservará la tercera parte del monto total de ellas; después de este término, la compañía quedará en libertad para expenderlas en cualquiera plaza de los Estados Unidos o de Europa.

26° —La compañía tendrá facultad de transportar en valijas cerradas, que no podrán abrirse, la correspondencia extranjera, por la vía de comunicación y estas valijas serán selladas por los administradores de correos o de los de aduanas marítimas.

27° —Se concede a la compañía el privilegio exclusivo de navegar, con bandera mexicana, por el río Coatzacoalcos, durante todo el tiempo de la concesión, estableciendo vapores para el servicio de la línea que podrán no tener la dotación que las leyes exigen para que los buques se reputen nacionales; pero quedando sujetos, su capitán, empleados y sirvientes, a la prescripción del artículo 21° de este decreto.

28° —El privilegio concedido a la compañía en el artículo anterior, no se opone a que todos los habitantes y dueños de haciendas o de otra propiedad, situadas sobre las orillas del río, puedan importarles los objetos de que tengan necesidad y exportar sus productos agrícolas o manufactureros, por buques de construcción y con bandera mexicana.

29° —Los buques de la compañía que sean destinados técnicamente a conducir la correspondencia y mercancías de tránsito en toda la vía, estarán exentos del derecho de toneladas.

30° —La compañía transportará en sus buques, libres de gastos, la correspondencia que venga por cualquiera punto de la República y a la que de ella se envíe a los otros donde tocaren sus vapores; recibéndola y entregándola con las mismas formalidades de estilo, de la misma manera transportará todos los efectos y objetos que sean propiedad del Gobierno, por la mitad de la tarifa; igualmente conducirá, sin estipendio alguno en ida y vuelta, los oficiales, tropas, empleados y agentes del gobierno general o de los estados que caminen por causa del servicio público. Los metales y productos agrícolas o manufactureros de la República, serán transportados por un veinticinco por ciento menos del precio de tarifa.

31° —El máximo de la tarifa en la vía de navegación, será la de tres cuartas partes de la tarifa del camino de hierro.

32° —Si además del puerto de La Ventosa, necesitare la compañía otro en el Pacífico, para depósito e invernadero, deberá preferir el de Acapulco.

33° —La compañía tendrá obligación de construir (sic) en

México un apoderado con las instrucciones y autorizaciones necesarias, para entenderse con el gobierno general y demás autoridades de la República, en todos los negocios que se refieren a las obligaciones que le impone este decreto.

34° —Este privilegio caduca porque la compañía no cumpla con alguna de las obligaciones o infrinja las restricciones que se le imponen en el presente decreto, así como porque suspenda los trabajos en el camino por el espacio de cuatro meses. En cualquiera de esos casos, no solo perderá la concesión, de que el gobierno mexicano podrá disponer a su arbitrio, sino todos los gastos y obras que hubiere hecho en el Istmo, que quedarán a beneficio de la nación, pagando además la compañía una multa de cincuenta mil pesos, que será afianzada a satisfacción del ministerio de Fomento.

35°.—En el caso de que se suscite alguna duda o diferencia en la ejecución o interpretación de este privilegio, será decidida por árbitros arbitradores y amigables componedores, uno nombrado por el Gobierno y otro por la compañía; los cuales antes de empezar a conocer, nombrarán un tercero para el caso de discordia. Contra la sentencia de los árbitros y el tercero, no habrá apelación ni recurso alguno.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, a 7 de septiembre de 1857.

Ignacio Comonfort

Al ciudadano Manuel Siliceo.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes.

Dios y Libertad. México, septiembre 7 de 1857.

Manuel Siliceo

EL GOBIERNO DE COMONFORT RECHAZA AMBOS
PROYECTOS DE TRATADOS

México, septiembre 12 de 1857

Sr. John Forsyth
Ministro de Estados Unidos en México

El suscrito, ministro de Relaciones Exteriores de la República, tiene el honor de contestar a la comunicación que el honorable John Forsyth, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Estados Unidos, le dirigió el 5 del presente.

En ella, su excelencia se complace en manifestar que, de acuerdo con las instrucciones de su gobierno, existen dos proyectos de tratados, uno relacionado con el cambio de la frontera norte entre las dos repúblicas y el otro que atañe a ciertas estipulaciones en relación con la comunicación interoceánica a lo largo del Istmo de Tehuantepec. Su excelencia agrega que está dispuesto a conferenciar, si el gobierno de México desea abrir negociaciones con esos propósitos.

El infrascrito consideró su deber comunicar el contenido de la comunicación y los proyectos a su excelencia, el Presidente de la República, esperando recibir instrucciones, quien aprobó la siguiente respuesta.

En lo que respecta al proyecto del Tratado para un cambio en la línea divisoria de la frontera norte, hay ciertos puntos en sus artículos en los que México no puede estar de acuerdo, siendo deber primordial del suscrito hacer constar que el Gobierno de la República considera inadmisibles cualquiera plan que esté basado en la cesión de alguna fracción de territorio nacional.

Respecto al segundo proyecto se proponen otras concesiones,

tales como el derecho perpetuo al paso, el derecho de tránsito a la fuerza armada y la protección en el Istmo. México no puede admitir estas estipulaciones, ya que ello cercenaría sus derechos de soberanía en este territorio.

A pesar de esto, conservando sus absolutos e inalienables derechos, el gobierno de la República está dispuesto a procurar, de la manera más conveniente, el incremento y seguridad de los beneficios de la comunicación interoceánica, no solamente en favor de los intereses y del comercio de México, sino también en favor del comercio de Estados Unidos y de otras naciones.

Por estas razones, las negociaciones serían infructuosas, si su excelencia, el señor Forsyth, siguiendo sus instrucciones, no consiente en prescindir de los puntos indicados, pero si se modifican substancialmente las proposiciones o se presentan otras nuevas que no repugnen al espíritu de esta comunicación, entonces no habrá obstáculo de parte del gobierno mexicano, animado como está, por sentimientos de amistad, en concertar felices relaciones entre las dos repúblicas.

El suscrito tiene el honor, etc....

Sebastián Lerdo de Tejada
Ministro de Relaciones Exteriores de México

FORSYTH ANUNCIA QUE NADA TIENE QUE HACER SINO
INFORMAR A SU GOBIERNO DE LA REPULSA

México, septiembre 15 de 1857

Sr. Sebastián Lerdo de Tejada
Ministro de Relaciones Exteriores de México

El infrascrito, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Estados Unidos, tiene el honor de acusar recibo de la comunicación de su excelencia, ministro de Relaciones, del 12 del presente, por la cual ha sido informado de que el gobierno de México rehúsa entrar en negociaciones sobre un tratado en que se establezca un cambio de la frontera norte entre ambas repúblicas y ciertas concesiones a Estados Unidos en el Istmo de Tehuantepec. Hace tiempo que el suscripto fue autorizado para insistir en la conclusión de un tratado; no tiene ahora nada que hacer sino informar a su gobierno sobre la respuesta del gobierno mexicano a sus proposiciones y esperar sus próximas instrucciones.

El suscripto no puede dejar pasar esta ocasión sin referirse a un pasaje de la nota de su excelencia, la que fuera tomada en relación con el espíritu de un contrato anterior hecho por el Gobierno mexicano con la Compañía Louisiana para la apertura de la vía del Istmo de Tehuantepec, que, aparentemente, tiene un importante significado.

Su excelencia afirma, entre otras cosas, que “el derecho al paso de la fuerza armada” en el Istmo, está garantizado por México, “menosprecia sus derechos de soberanía sobre este territorio”, mientras que en la garantía a la Compañía Louisiana, fechada el 7 del presente, pesa una restricción en el artículo 22, en el cual se prohíbe absolutamente el transporte de las fuerzas armadas, extranjeras a nacionales, sobre

cualquier camino o tránsito que se pueda controlar. El suscripto debe observar que si la garantía de un permiso de México a Estados Unidos para el tránsito de sus tropas y municiones a largo del Istmo equivale a un menosprecio de su soberanía de ‘los derechos mexicanos en ese territorio, entonces México ya ha *quo ad hoc* con esa soberanía.

En el artículo 8° del Tratado de 30 de diciembre de 1853 se previó, entre otros casos, que “ambos gobiernos concertaran un arreglo rápido para el tránsito de tropas y municiones de Estados Unidos que tenga este Gobierno que enviar de una parte a otra de ese territorio, en los extremos del continente”. Es verdad que los “arreglos” aquí discutidos, nunca se han hecho, pero esa causa de que hasta este momento la ruta a través del Istmo no ha sido abierta y no ha habido ocasión para Estados Unidos de requerir el cumplimiento de esta estipulación; cuando esta ocasión se presente, el Gobierno de Estados Unidos debe insistir, con todo derecho, para que se hagan los arreglos necesarios y perfeccionar la concesión concedida por México, en este artículo, o sea el tránsito de sus tropas a través del Istmo. El suscripto puede omitirlo, si actúa dentro del espíritu de las instrucciones de su gobierno, sin protesta, pues no va contra ninguna acción, declaración o interpretación del Gobierno mexicano, el cual puede ser instado a cumplir o citado para aclarar las garantías del artículo 8° del Tratado de 1853, ya que los territorios de Estados Unidos están en las fronteras de los dos océanos que lindan con el territorio mexicano, dando lugar así a ese tránsito completo que acortaría en ocho días el paso de sus ciudadanos, mercancías y tropas, que efectuándolo por otra ruta cualquiera; no es de esperarse que Estados Unidos, en una época en la que el vapor y la electricidad han proporcionado ahorro de tiempo, elemento tan importante de progreso, pueda olvidar las ventajas y los privilegios garantizados solamente por las estipulaciones del Tratado.

Hasta ahora, el Gobierno de Estados Unidos pretende que está en su derecho al esperar que una república amiga y vecina amplíe los privilegios y facilidades de tránsito en esta importante carretera, entendiéndose siempre que disfrutarán del respeto de los derechos soberanos de México en ese territorio, sin detrimento de los intereses,

honor o prosperidad del pueblo mexicano.

Este interesante problema está destinado, seguramente, a ser objeto de una pronta investigación y negociación entre ambos gobiernos y, si el suscripto tuviera la oportunidad de ser el ministro de Estados Unidos cuando esto suceda, no vacilará en demostrar, con justos argumentos, no solamente que el gobierno de México pueda tratar con el de Estados Unidos, dentro del espíritu de los artículos de Tehuantepec posteriormente agregados, sin menosprecio de su soberanía, sino con el más amplio sentido del deber y el más alto interés nacional.

El suscripto aprovecha la ocasión, etc...

John Forsyth
Ministro de Estados Unidos en México

FORSYTH CENSURA LA POLÍTICA DE SU GOBIERNO Y SE
MUESTRA DOLORIDO POR LA INTERFERENCIA EN SUS
FUNCIONES DE BENJAMÍN Y LA SERE

México, septiembre 15 de 1857

Sr. Lewis Cass
Secretario de Estado de los Estados Unidos

Señor:

El honorable señor Emile La Sere, a quien fueron confiadas las instrucciones incluidas en los despachos del departamento números 27 y 28 de la serie, me las ha entregado y dichas instrucciones me colocan en una posición insostenible, pues se me solicita iniciar y finiquitar una negociación con el gobierno de México, que, según informes en poder del departamento, a consecuencia de una cuidadosa observación y con mi mejor criterio, yo había declarado imposible llevar a la práctica: discutir nuevos límites entre ambos países, lograr la cesión de una parte de Chihuahua, casi todo Sonora y la Baja California íntegra con sus islas adyacentes, cuando el departamento de Estado, si hubiese tenido confianza en mis observaciones y las hubiese estudiado con simpatía y honestidad, habría llegado a la conclusión de que el actual gobierno de México se ha comprometido firmemente ante la Nación, a no ceder un palmo del territorio nacional.

Esta proposición hiere en lo más profundo de su orgullo al país y si se considera la suma de dinero que se ofrece en compensación, es mucho menor que el inmenso valor que el gobierno y la nación asignan a sus dominios. A la proposición de nuevos límites se adjunta otra para obtener de México importantes y estimables privilegios respecto al

tránsito libre por el Istmo de Tehuantepec, extendiendo los ya contenidos en la concesión en el artículo 89 del Tratado de 1853 y por estas franquicias el gobierno de Estados Unidos no ofrece ninguna compensación económica o equiparable. Es evidente que el departamento sostiene una elevada opinión sobre el valor de las concesiones pedidas a México por los términos del despacho número 27, que me impone de la magnitud de la negociación que me ha sido encomendada.

México es consciente del enorme valor que representa el Istmo para Estados Unidos y para el comercio mundial México recuerda que hace diez años, cuando el mundo comenzó a vislumbrar la importancia de esta gran carretera mundial y cuando el actual primer magistrado estaba al frente del departamento de Estado, Estados Unidos ofreció 15'000,000 por el derecho de atravesarla. México recuerda que durante la corta duración de la presente administración, le han sido ofrecidos, privadamente, 4'000,000 por el mismo derecho. México debe saber que entre sus ciudadanos de gran fortuna se encontraría más de uno —creo que más de diez— que podrían pagar la suma de 12'000,000 de pesos ofrecida por Estados Unidos por la compra de las tierras que nos interesan, sin la enajenación de su soberanía. En estas condiciones el departamento percibirá que, desde un principio, es imposible el éxito en la negociación que me ha sido confiada.

Mal debo haber empleado los diez meses de mi residencia aquí al no haber descubierto esto a primera vista. Estoy totalmente persuadido de los hechos y pongo gran cuidado y atención para no arriesgar la influencia que he podido adquirir con este gobierno, sin desear que mi propio gobierno viera expuestas sus propuestas a un desaire oficial, creí mi deber conseguir una entrevista con el presidente Comonfort y poner en su conocimiento el proyecto del Tratado, en lugar de dirigirle comunicaciones oficiales por conducto del ministerio de Relaciones. Esta entrevista fue acordada y, en una conferencia de dos horas y media, lo puse al tanto de las instrucciones y los deseos de mi gobierno, tratando de hacerlo con toda delicadeza posible, pues lo conocía como un hombre de opiniones inalterables.

Escuchó con respeto y atención y, a solicitud mía, se tomó el

tiempo necesario para considerar sus respuestas a mis proposiciones, ya fuera que su gobierno aceptara o no discutir el tratado. Después de tres días me hizo llamar y me informó rápidamente, sin reservas y con énfasis, que bajo ninguna circunstancia permitiría cercenar los límites territoriales de la República. Reforzó su declaración repitiendo lo que varias veces antes habla dicho, que antes se arrojaría de una de las ventanas de Palacio. “Cada Presidente, señor Forsyth, dijo, tiene su sistema. El sistema de don Antonio —refiriéndose a Santa Anna— era vender su país, el mío es conservarlo”.

Declaró claramente que sería perder el tiempo hacer la proposición formal por conducto del ministerio de Relaciones, que su respuesta era terminante e irrevocable. Se manifestó sorprendido de que el gobierno de Estados Unidos, después de las declaraciones que hizo al mundo el 4 de marzo de 1857, creyese, por un momento, que pondría en venta su país, Pero, deseando cumplir en todo su espíritu y su letra las instrucciones de mi país, dejé pasar tres semanas después de la entrevista con el Presidente y dirigí una nota al ministro de Relaciones, proponiendo la apertura de las negociaciones conforme a sus términos.

Adjunto la nota con su respuesta; no podía esperarse otra cosa pues no sólo habría el general Comonfort traicionado su declaraciones al mundo y deshonrado su palabra, repetidas veces empeñada, al acceder a la proposición, sino también hubiese violado la ley orgánica de su Gobierno, artículo 84 del Estatuto Orgánico, promulgado por su administración con fecha de mayo 5 de 1856, que dice: no puede el Presidente de la República enajenar, ceder, permutar o hipotecar parte alguna del territorio de la nación.

Con respecto a los privilegios requeridos por mis instrucciones sobre el Istmo de Tehuantepec, se hubieran ahorrado muchas dificultades si yo hubiese estado autorizado para su compra. Por cierto que los artículos que se refieren al Istmo, los relativos a reclamaciones que son los técnicos que contenían el elemento indispensable para concertar un Tratado —dinero— se desbarataron al tratar el asunto territorial. Antes de recibir estas instrucciones, yo había sondeado al Gobierno sobre el asunto del Istmo y estaba seguro que podrá obtener concesiones quizás

más amplias que las indicadas en las instrucciones, concesiones que hubiesen dado a Estados Unidos el protectorado virtual y la ocupación militar.

Los señores Benjamín y La Sere, con seguridad, informarán al departamento sobre el resultado de su misión privada referente a los intereses de la compañía Garay, Hargous y Louisiana Tehuantepec. De acuerdo a sus instrucciones, presenté al Presidente a estos caballeros y le informé que yo estaba autorizado a asegurarle que el plan que le propondrían tenía la aprobación de nuestro Gobierno.

Del curso y la historia privada que hayan seguido las negociaciones no puedo hablar, pues no sé nada. No se me ha pedido colaboración ni he sido consultado sobre los pasos que ha seguido la negociación. En verdad, por la actitud que ha tornado la opinión pública y en el lugar en que la prensa ha colocado a estos señores, mi colaboración no ha sido necesaria para nada. Han figurado en los periódicos de esta capital como los “negociadores estadounidenses”, mientras que dentro del círculo en que se han movido se ha hecho público que el señor Benjamín posee poderes amplios y secretos del gobierno y que, por el momento, la legación de Estados Unidos en México estaba a la expectativa. En los mismos círculos se ha afirmado que el actual ministro (estadounidense) ante el gobierno, nunca concertará un tratado ya que su propio gobierno no confía en sus habilidades para llenar las exigencias de su misión y que un tratado sólo podría celebrarse después de ser removido. En poco tiempo, desde la llegada de estos caballeros, México ha sido escenario de una exacta repetición de todos aquellos informes injuriosos, insinuaciones y conjeturas, que los periodistas esparcieron por telégrafo y por correo, a través de la prensa estadounidense, muchos meses después del 10 de febrero que llegaron a Washington los tratados que concerté. No aludo a estos asuntos por razones ligeras; lo hago, en primer lugar, porque mi honor, como representante de mi país, se ve envuelto en ello y, en segundo lugar, porque deseo proporcionar al departamento una razón convincente del motivo que existió para no solicitar autorización para deliberar, si la deseaba, con los señores Benjamín y La Sere como

“patriotas e inteligentes caballeros” y usar de su ayuda para llevar a cabo las negociaciones que me fueron conferidas.

Bajo ninguna de las circunstancias del presente caso podría su colaboración haber sido de la menor utilidad, pero, respaldados como estaban por la opinión pública, me vi obligado por toda consideración de dignidad personal, como hombre y ministro, a negarme a deliberar con ellos. En los despachos de banqueros y capitalistas y, en fin, en el ambiente en que se mueven estos caballeros aquí, se comentó que su presencia disminuía la categoría de esta legación. Después de estudiar cuidadosamente mis instrucciones respecto a estos señores y de la nota quo usted me dirigió, no pude hallar duda alguna que no ha sido la intención del Gobierno colocarme en esta situación. Todo el tenor del despacho excluye la idea de que ellos debieran asumir, ni en mínima parte mis funciones oficiales; fuera de esto era imposible concebir que tal insulto a un ministro diplomático hubiese emanado de dos caballeros que el Presidente y el secretario de Estado habían considerado distinguidos representantes de su país en el extranjero y que estaban plenamente compenetrados de las sutilezas de dicha misión.

Pero, mientras relevo totalmente al Gobierno por colocarme en esta situación embarazosa, quiero, sin embargo, por cubrir mi honor ante el Departamento, se hagan las declaraciones necesarias para dejar asentados los verdaderos factores del caso.

El Departamento podrá advertir en la copia que incluyo, que los señores Benjamín y La Sere han concluido el contrato en forma de concesión a la Compañía Louisiana y que no tiene ni la forma ni la conformidad dentro de los términos y condiciones asentados en las instrucciones que usted me enviara. Las negociaciones se mantuvieron en el más profundo secreto, el que fue celosamente guardado sin que estuviera en mi poder controlar o prevenir este cambio en el programa hecho por usted. Hice lo único que podía para precisar la conformidad de las instrucciones y para proteger los intereses del gobierno de Estados Unidos y esto se concretó, en medio de misteriosas negociaciones, a llamar al Presidente para entregarle un extracto de las instrucciones emitidas por usted, marcando las condiciones sobre las cuales había

recibido órdenes precisas de sostener los puntos de los señores Benjamín y La Sere. El extracto es el que transcribo:

“Deseo que claramente distinga que el ejercicio de cualquier influencia de su parte en favor de cambios a la concesión Garay que se pretende obtener del Gobierno mexicano por los señores Benjamín y La Sere, serán bajo la condición de que la nueva concesión esté de acuerdo con las estipulaciones de los siguientes artículos”.

Leí al Presidente los artículos a que se hace referencia y le dije que, mientras no podía ser admitido para participar en el misterio de lo que se estaba discutiendo, sería mi deber decir que mi influencia, como representante de Estados Unidos, en favor del arreglo que estaba por hacerse, era considerarlo aceptado a rechazado de acuerdo a si los arreglos estaban o no de conformidad con estos artículos. El Presidente contestó que el asunto contenido en estos artículos tenía gran importancia y que se requería una seria consideración de parte del Gobierno mexicano, y que él no podía, en una reunión tan informal, dar una opinión sobre el asunto y aconsejó que se presentara de manera oficial ante el Gobierno a través del ministerio de Relaciones Exteriores. Respecto a los señores Benjamín y La Sere, dijo que ellos le habían sido presentados por mí, en mi carácter de ministro de Estados Unidos y que los había recomendado a su favorable consideración de acuerdo a las instrucciones recibidas del Presidente de Estados Unidos; que estaba tratando con ellos con carácter personal y haciendo un contrato con mayores ventajas para México y que no podía percibir lo que tenían que ver el gobierno de Estados Unidos o su ministro en un asunto que exclusivamente pertenecía a México. Omitiría un factor material para mejor comprensión de este caso si no hiciera mención a que, en esta entrevista con el Presidente, descubrí un freno en su comportamiento que antes nunca me había demostrado y muy en contraste con la cordialidad que en todas las demás ocasiones me había conferido. Habiendo hecho esto, sólo me quedaba esperar los resultados.

Creo que el Departamento debería hacer un estudio cuidadoso de las nuevas concesiones y que éstas darían por resultado que el gobierno de Estados Unidos no recibiría ningún beneficio, sino al contrario sufriría

grandes pérdidas, no habiéndose ganado nada para los intereses comerciales al remover los obstáculos y las dificultades en lo que respecta a la apertura anticipada del tránsito istmeño.

En la forma como entiendo las instrucciones de usted, nunca se previó que la concesión Sloo pudiera ser anulada, sino que los privilegios que requería la Compañía Louisiana deberían basarse sobre las asignaciones de la concesión hecha a Falconnet. Había numerosas razones, tanto de índole privada como pública, que así lo aseguraban. Consentir en la anulación de la concesión Sloo, era dar a México un argumento más claro para no tomar en cuenta el artículo 8° del Tratado Gadsden, conectado directamente con el artículo 2° del Tratado que no exime al gobierno de Estados Unidos de las obligaciones que le impone el artículo 11° del Tratado de Guadalupe Hidalgo. De hecho, la nueva concesión presupone la no existencia del artículo 8° del Tratado Gadsden, que en su artículo 20° impone una restricción sobre la nueva compañía que se encuentra en conflicto directo con sus garantías. La restricción prohíbe transportar “tropas extranjeras” por sus caminos “sin permiso especial del gobierno mexicano”. Todo el espíritu y contexto de la concesión excluye cuidadosamente la idea de que ningún otro interés, que no sea el mexicano, ha sido consultado, así como que la única autoridad que se reconoce es la mexicana; todo lo cual seguramente no “conforma a las estipulaciones de los artículos” mencionados en mis instrucciones y cuya conformidad debería ser la condición para que yo sostuviese los planes de los señores Benjamín y La Sere. El Departamento también encontrará que la anulación de la concesión Sloo, usurpando, el gobierno de México, arbitrariamente el poder, pone en peligro todos los intereses estadounidenses del Istmo. Todos los derechos contenidos en la concesión Sloo que fueron destruidos por el decreto Curt del 3 del presente, puede prevenir, en el futuro, al gobierno de México para que emita un decreto similar respecto a la nueva concesión, especialmente cuando en su artículo 34°, el Gobierno se reserva el derecho de cancelarlo, “y de disponer de la concesión a su juicio”. Aun en ausencia de esta reserva, los nuevos concesionarios no pueden quejarse, puesto que el origen de la misma está basado en el

reconocimiento del poder gubernamental para cancelarlo. ¿Qué seguridad hay contra este importante privilegio si cayera en otras manos, por ejemplo una compañía extranjera? ¿Qué seguridad tendrían los capitalistas de su inversión en una empresa que está a merced de un gobierno caprichoso, quien, como en el caso de la concesión Sloo, siendo parte del contrato, sin previo consejo judicial y sin siquiera notificar a las partes interesadas, prohíbe y cancela un contrato? Este sentimiento de inseguridad se afirmará cuando —y seguramente así será— los Estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, partes de la concesión Sloo, lleven a cabo las solemnes protestas que ya han iniciado contra el gobierno, apelando a la Suprema Corte de México para que proteja sus intereses contra el arbitrario poder Ejecutivo. En opinión de los más hábiles juristas de México, el gobierno no estará en condiciones de soportar la prueba de esta apelación.

Se percibirá que la cuestión del tráfico istmeño está más complicada y compleja que nunca. Se podría haber evitado toda dificultad procediendo en una forma legal, que era la que el Departamento proponía basándose en la concesión Falconnet, invocando al poder judicial para que obligase a Sloo a exonerar su concesión o a venderla en beneficio de la hipoteca. Si eso se hubiera hecho, la Compañía Louisiana hubiera comprado el privilegio durante el remate, así se hubieran llevado a cabo los puntos de vista del Departamento, es decir, la compañía hubiera tenido la actitud precisa, definida en sus instrucciones y todo impedimento legal hubiera sido descartado.

Mi opinión es clara; los señores Benjamín y La Sere no tenían derecho de usar las extraordinarias ventajas que el señor Presidente los confirió para negociar, sino únicamente para lo que se les había encomendado. Lamento que la negociación que me fue encomendada no haya llegado a tan feliz término como la que los señores Benjamín y La Sere obtuvieron en sus gestiones privadas. Mientras estos caballeros llevan un privilegio de mayor a menor valor, el gobierno de Estados Unidos no recibe nada y, mucho me temo que tenga algunas pérdidas. Es cierto que se ha perdido un tiempo valioso entre el día que recibí las instrucciones y el 16 del corriente, cuando el general Comonfort perdió

sus plenos poderes. Fracasando, como yo ya lo sabía, en obtener la firma de este gobierno a un tratado basado en la cesión de territorio, hubiera podido concluir una negociación que abarcara los deseos del Departamento en relación a Tehuantepec, en una forma más eficaz que aquella expresada en los artículos que acompañaron mis instrucciones. Hubiera podido, también, obtener la concesión del derecho de paso para un ferrocarril a través de la región norte del país, casi en la misma línea que marca la nueva frontera; con tales concesiones se alternaría en tierras, desde el río Grande a la Alta California y a Guaymas, del Golfo de Cortés, ya que no sólo hubiera constituido una cuantiosa reserva para la construcción de un camino, sino que hubiera cercado y concentrado para uso estadounidense, y propiedad exclusiva, el mismo territorio que mi gobierno deseaba comprar. Digo que yo hubiera podido hacer esto cuando los señores Benjamín y La Sere llegaron a México, porque cuando el señor Comonfort se rehusó rotundamente a tratar lo concerniente a territorio, yo mismo le indiqué la posibilidad de tratar sobre una negociación similar y, con un mapa frente a nosotros, tracé la línea de ferrocarril que se proponía. Se manifestó no solamente deseoso, sino ansioso para entrar en tal arreglo y recordándome la proximidad del 16 de septiembre, prometió cerrar el contrato con los señores Benjamín y La Sere tan pronto como fuera posible, para dar así tiempo de perfeccionar este arreglo. La última quedó en suspenso hasta el día 7 del presente y sus conclusiones no fueron hechas públicas sino el día 10.

Tan pronto como vi esta publicación, me apercibí de que era más que nunca necesario asegurar a Estados Unidos los privilegios que habían sido puestos en peligro sobre el Istmo, tratando de hacerlo de inmediato para aprovechar el tiempo en que el señor Comonfort gozaba todavía de plenos poderes. Pero era demasiado tarde. Por alguna causa misteriosa que aún no he podido descifrar, el Presidente había cambiado de opinión y hasta se fingió enfermo para evitar, así, una entrevista conmigo sobre el particular. Por mi parte, sin sospechar nada de esta naturaleza, no puedo dejar de conectar el cambio de propósitos tan notorio, con la declaración hecha hace unas semanas por el señor Escandón, hombre altamente compenetrado con la política mexicana y asesor confidencial y amigo

personal de los señores Benjamín y La Sere, relativa a que “yo no podría concertar un tratado con México”. No puedo dejar de pensar en esto, con la convicción de que tantas circunstancias y situaciones en las que me he esforzado para servir a mi país en descargo de los deberes de sus misiones, han sido contrarrestadas y mis derechos oficiales alterados, por las mismas personas a quienes pude haber llamado “caballeros inteligentes y patriotas” en la convicción de que me ayudarían en mi negociación pero, siendo yo, en todas las circunstancias, el único juez.

La nota del señor Lerdo, fechada el 12 del presente, en respuesta a la día del día 5, en conexión a las restricciones del artículo 20° —de la última concesión a la Compañía Louisiana— me pareció que contenía un significado que no podía pasar por alto. Dirigí una nota al señor Lerdo, fechada el 15 del actual —copia de la cual adjunto—, protestando, a nombre de mi Gobierno, contra cualquier acto o interpretación del mismo que pudiera disminuir en grado último la seguridad y efecto de las garantías contenidas en el artículo 89 del Tratado Gadsden, advirtiendo a México que, bajo ninguna circunstancia, Estados Unidos, no cedería ni una fracción de los derechos que ese Tratado le otorgó.

En otro despacho, indicaré al Departamento lo único que, en mi opinión, puede hacerse con México en lo referente a negociar un tratado. Si el gobierno de Estados Unidos no puede consentir tales bases para un tratado, en vista de que ninguno de los dos países ocuparán durante mucho tiempo más su presente condición de reclamaciones pendientes, de injusticia y diarios atropellos en las personas y propiedades de nuestros ciudadanos, la única alternativa será utilizar un tono más alto y obligar a México a respetar sus obligaciones para con nosotros en nuestro carácter de potencia civilizada y vecina. Si estos asuntos no pueden llegar a feliz término por medio de negociaciones, mientras más pronto se haga sentir el poder de Estados Unidos será mejor, ya que nuestros ciudadanos son vejados y la dignidad de nuestro país es violada y pisoteada todos los días del año por insolentes oficiales mexicanos.

Quedo de usted, etc.

John Forsyth
Ministro de Estados Unidos en México

FORSYTH INICIA UNA NUEVA TÁCTICA EN SU FUNCIÓN DIPLOMÁTICA

México, noviembre 18 de 1857

Sr. Lewis Cass
Secretario de Estado de los Estados Unidos

Señor:

Hace uno o dos días recibí una noticia confidencial, que deseo transmitir a toda prisa al Departamento. El general Comonfort declaró últimamente a un amigo que no conservaría su posición más allá de febrero, pero que, mientras tanto, dispondría de una parte del territorio nacional. Este es el primer indicio que tengo de la posibilidad de un cambio en su idea fija sobre este asunto. Nada puede sorprendernos en un estadista mexicano, y me temo que si piensa cambiar su política al respecto, se deba a la desesperada situación en que se encuentra.

Si el Presidente aún desea que se discuta un proyecto sobre un tratado para el cambio de límites que recientemente me fue enviado, sugiero que se me autorice a ofrecer sumas considerablemente aumentadas. Para asegurar el éxito de tan importante objetivo, debo tener la autorización para ofrecer al Presidente y al Congreso, en el momento oportuno, una cantidad que represente una tentación difícil de resistir y que, al mismo tiempo, haga acallar hasta cierto punto la reacción popular.

La que he podido averiguar sobre el verdadero valor de los territorios en cuestión, me asegura que serán una apreciable adquisición, cualquiera sea el precio que se invierta en ellos.

No me cabe duda que Sonora y Chihuahua, si no Baja California, son tan ricas en minerales, fertilidad de su suelo y bonanza de su clima, como Alta California. Creo que estas fértiles regiones, tienen un inmenso valor y que nuestro gobierno debe considerar que siempre el carácter

nacional está por encima de cuestiones de dinero teniendo, entonces, que estipular la justa compensación sin abusar de las necesidades de un débil y agitado país, aunque ello signifique una magnífica adquisición para nosotros. Quizás cuando reciba respuesta del Departamento a este despacho, ya sea tarde para actuar, a menos que Comonfort consiga fondos rápidamente; haré todo lo posible por sostenerlo mientras llega la respuesta del Departamento en el primer correo...

John Forsyth

Ministro de Estados Unidos en México

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO RECOMIENDA A FORSYTH
INSISTA PERO NO SE COMPROMETA OFRECIENDO
PRÉSTAMOS

Washington, enero 6 de 1858

Sr. John Forsyth
Ministro de Estados Unidos en México

Señor:

Con referencia a la insinuación contenida en su número 56, de 18 de noviembre, sobre la posibilidad de cumplir los deseos del Presidente respecto al cambio de fronteras, quiero poner en su conocimiento que la política de este Gobierno sobre ese punto no ha variado desde las instrucciones que le he enviado en mis despachos números 27 y 28. Esas instrucciones hacían referencia a las negociaciones de dos tratados, uno de ellos, sobre la adquisición de derecho de paso a través del Istmo de Tehuantepec, y el otro en relación con la compra de dos partes ya designadas de territorio mexicano. El Presidente le agradecería que, aprovechando la condición actual de las relaciones con México, usted lograra los objetivos mencionados en esos despachos y no duda de que usted empleará el máximo esfuerzo para lograr ese objetivo. Sin embargo, no consentirá en autorizar un tratado para la compra del territorio mencionado independientemente del derecho de tránsito a través del Istmo, y no está preparado para cubrir los precios mayores de los que usted estuvo autorizado para ofrecer por ese territorio, en mi número 28, fuera de las sumas establecidas en él.

Aludiendo a la misma comunicación —su número 56— a la necesidad del presidente Comonfort respecto a los 2'500,000 dólares

para combatir a los movimientos revolucionarios que los amenazaban, usted afirma que está tratando de inspirar la confianza necesaria para convencer a los banqueros de que presten esa suma, y que “usted debe encargarse del financiamiento del Departamento en caso de que tome medidas decisivas para afrontar las exigencias de la situación”. El Presidente no está preparado para determinar a qué “medios decisivos” se refiere aquí, por las cuales usted debe encargarse del financiamiento del Departamento. La política de este gobierno no es interferir en las dificultades de partidos opuestos en otras naciones para dar a cualquiera de ellos una ventaja sobre el otro, ya sea en el aspecto pecuniario o en cualquier otro. Las reglas de conducta a que deben ajustarse los agentes en el extranjero están correctamente establecidas, así como la no intervención en la política interna de los países con los cuales estén relacionados y ningún procedimiento de violación a esta regla puede recibir la aprobación del Departamento.

Soy su...

Lewis Cass
Secretario de Estado de los Estados Unidos